Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a dieciséis de octubre dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión número **01285/INFOEM/IP/RR/2024**, interpuesto por la **C. XXXXXXXXXX**,en lo sucesivo la parte **Recurrente**, en contra de la respuesta del **Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México**,en lo subsecuente **El Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución.

**A N T E C E D E N T E S**

**PRIMERO. De la solicitud de información.**

En fecha ocho de febrero de dos mil veinticuatro, la parte **Recurrente**, presentó a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX),** ante el **Sujeto Obligado**, la solicitud de acceso a la información pública, a la que se le asignó el número de expediente **00052/TRIJAEM/IP/2024**, mediante la cual solicitó lo siguiente:

*“La convocatoria, los exámenes teórico y práctico, las actas en que consten los exámenes orales, así como todos los documentos relacionados con el Concurso de Oposición para ocupar las plazas de Secretario de Acuerdos, en los que resultaron seleccionados los servidores públicos JOAQUÍN GARCÍA DOMÍNGUEZ y TOMÁS GABRIEL ESQUIVEL GIL.” (Sic).*

**MODALIDAD DE ENTREGA:** A través del **SAIMEX**.

**SEGUNDO. De la respuesta del Sujeto Obligado.**

De las constancias que obran en el sistema SAIMEX, se advierte que en fecha veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, **El Sujeto Obligado** emitió la respuesta en los siguientes términos:

*“En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*Se notifica respuesta mediante archivos adjuntos*

*ATENTAMENTE*

*LIC. LESLIE ADRIANA SERRANO FLORES” (Sic).*

El **Sujeto Obligado** adjuntó a su respuesta, los archivos electrónicos denominados *“05200375720240228174500.pdf”* y *“ACUERDO DE RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 00052.pdf”;* cuyo contenido no se inserta por ser del conocimiento de las partes, sin embargo, serán motivo de estudio en el Considerado respectivo.

**TERCERO. Del recurso de revisión.**

Inconforme con la respuesta por parte del **Sujeto Obligado**, el ahora **Recurrente** interpuso el presente recurso de revisión en fecha siete de marzo de dos mil veinticuatro, el cual fue registradoen el sistema electrónico con el expediente número **01285/INFOEM/IP/RR/2024**, en el cual aduce, las siguientes manifestaciones:

1. **Acto Impugnado:** *“La respuesta a la solicitud” (Sic).*
2. **Razones o Motivos de Inconformidad**: *“La respuesta del sujeto obligado, viola en perjuicio de la suscrita el Derecho Humano de Acceso a la Información, determinado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 4 de la Carta Democrática Interamericana; así como IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; ello en virtud de las razones siguientes: 1.- Porque el sujeto obligado afirma, que la “divulgación” de la información solicitada por la suscrita, “representa un riesgo real, demostrable e identificable en perjuicio significativo al interés público”, debido a que los exámenes de evaluación contienen reactivos que son reutilizables en otros procesos de evaluación, por lo que los participantes podrían conocer anticipadamente el contenido de los exámenes, sustentando su afirmación en el Criterio 5/14 del otrora Instituto Federal de Acceso a la Información; sin embargo, el sujeto obligado por alto que la dicente no solicitó únicamente los exámenes de conocimiento, sino todos y cada uno de los documentos generados y relacionas con el proceso de promoción a que se refiere el Capítulo Décimo Tercero del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa, que incluye desde la aprobación y publicación de la convocatoria respectiva, hasta el acta final de designación, lo que supone además de los exámenes de oposición, la solicitud de participación en el concurso en el que se presenten los requisitos previstos en la convocatoria, dentro de los que se encuentra el currículum vítae, título y cédula profesional, constancias de cursos de capacitación con valor curricular vinculados a la plaza por la que se concursa y las constancias de nombramiento que acrediten la carrera jurisdiccional, en su caso, INFORMACIÓN RESPECTO DE LA CUAL NO SE PRONUNCIÓ EL SUJETO OBLIGADO. 2.- Porque de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, párrafo 1 incisos a), b) y d) de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, así como 10 de los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura (aprobados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el trece de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco); es obligación inexcusable del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, que los procedimientos de ingreso y selección a que se refiere el Capítulo Décimo Tercero de su Reglamento Interior, ESTE SUSTENTADO EN LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA, ASÍ COMO CRITERIOS OBJETIVOS DE MÉRITO, LA EQUIDAD Y LA APTITUD, máxime cuando se trata de cargos públicos que se consideren vulnerables a la corrupción. Luego entonces y acorde con un control convencional, por estar vinculados al control social que garantiza el Derecho Humano de Acceso a la Información, todos los procesos de selección de personal deben ser trasparentes, a efecto de que la sociedad pueda constatar que las personas seleccionadas para ocupar un cargo, cumplen con los requisitos legales para ello y que tienen la aptitud necesaria para realizar sus funciones, máxime cuando se trata de un órgano jurisdiccional, aducir lo contrario resultaría inconvencional. 3.- Porque no es creíble, lógico ni racional, que en todos los exámenes de oposición de formulen las mismas preguntas a los aspirantes, considerando que la selección del personal se basa en un sistema de carrera jurisdiccional, donde los que no obtienen la plaza tienen la oportunidad de volver a participar, de ahí que al conocer los reactivos, en un nuevo examen los coloca en una ventaja sobre los que participan por primera vez, sin dejar de mencionar que los que resultan elegidos para el cargo pueden divulgar las preguntas con el objeto de beneficiar a alguien en una próxima convocatoria, SUPUESTOS QUE HACEN PROPICIA LA CORRUPCIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS. En virtud de ello y por encontrarse dentro de sus facultades, ese Instituto tiene la posibilidad de constatar si es verdad que en todos los exámenes se realizan las mismas preguntas. 4.- Porque se considerar que la información es clasificada, debió de emitirse la declaración correspondiente por parte del Titular del Área, misma que debió ser confirmada por el Comité de Transparencia, LO QUE NO SUCEDIÓ EN EL PRESENTE ASUNTO.” (Sic)*

**CUARTO. Del turno del recurso de revisión.**

Medio de impugnación que le fue turnado al Comisionado Presidente **José Martínez Vilchis**, por medio del sistema electrónico, en términos del arábigo 185, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios, del cual recayó acuerdo de admisión en fecha trece de marzo de dos mil veinticuatro, determinándose en él, un plazo de siete días para que las partes manifestaran lo que a su derecho corresponda en términos del numeral ya citado.

**QUINTO. De la etapa de manifestaciones y/o alegatos.**

Una vez transcurrido el término legal referido se destaca que, el **Sujeto Obligado** fue omiso en remitir su informe justificado; asimismo, se aprecia que la parte **Recurrente** tampoco emitió alegatos, pruebas o manifestación alguna.

**SEXTO. Del cierre de instrucción.**

Así, una vez transcurrido el término legal, permitió decretarse el cierre de instrucción en fecha dieciséis de abril de dos mil veinticuatro, en términos del artículo 185, Fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, iniciando el término legal para dictar resolución definitiva del asunto.

**SÉPTIMO. De la ampliación del término para resolver.**

En fecha tres de mayo de dos mil veinticuatro, se amplió el término para resolver el recurso de revisión en términos del artículo 181, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios por un plazo de quince días hábiles.

Por ello, es menester precisar que si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.

En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

a) Complejidad del asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.

b) Actividad Procesal del interesado: Acciones u omisiones del interesado.

c) Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro *“TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”*, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

***“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.”*** consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

***“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”***, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

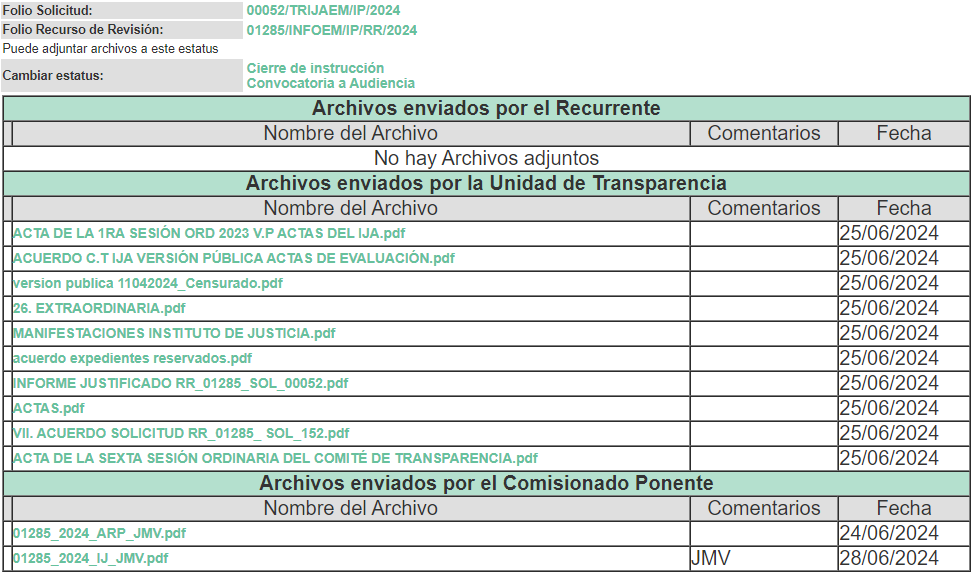
Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.

**OCTAVO. De la re apertura de la etapa de manifestaciones.**

En fecha veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro, en aras de garantizar los derechos de los ciudadanos, caso particular del **Recurrente**, en observancia del debido proceso y del principio pro-persona, se determinó **REVOCAR** el acuerdo de cierre de instrucción, emitido en fecha diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, a efecto de abrir de nueva cuenta la etapa de manifestaciones, con la finalidad de notificar el alcance al informe justificado y conceder un término de 3 (tres) días hábiles, a efecto que el **Sujeto Obligado** y el **Recurrente** se encuentren en posibilidades de rendir las manifestaciones que a sus derechos convengan.

**NOVENO. Del alcance al informe justificado.**

En fecha veinticinco de junio de dos mil veinticuatro, el **Sujeto Obligado** mediante los archivos electrónicos denominados *“ACTA DE LA 1RA SESIÓN ORD 2023 V.P ACTAS DEL IJA.pdf”*, *“ACUERDO C.T IJA VERSIÓN PÚBLICA ACTAS DE EVALUACIÓN.pdf”*, “*version publica 11042024\_Censurado.pdf*”, *“26. EXTRAORDINARIA.pdf”*, *“MANIFESTACIONES INSTITUTO DE JUSTICIA.pdf”*, *“acuerdo expedientes reservados.pdf”*, *“INFORME JUSTIFICADO RR\_01285\_SOL\_00052.pdf”*, *“ACTAS.pdf”*, *“VII. ACUERDO SOLICITUD RR\_01285\_ SOL\_152.pdf”* y *“ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.pdf”*; remitió un alcance para dicho recurso; por lo que el día veintiocho de junio de dos mil veinticuatro, se pusieron a la vista de la parte **Recurrente**, ampliando su respuesta inicial; y con el fin que no exista opacidad, se insertan a continuación:



**DÉCIMO. Del cierre de instrucción.**

En fecha cuatro de octubre del año en curso, en términos del artículo 185, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se decretó el cierre de las mismas, iniciando el término legal para dictar resolución definitiva del asunto.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. De la competencia**.

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por el ahora Recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 7, 9 fracciones I y XXIV, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO. De los alcances del Recurso de Revisión.**

Anterior a todo debe destacarse que el recurso de revisión tiene el fin y alcance que señalan los numerales 176, 179, 181 párrafo cuarto, 194 y 195 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente y será analizado conforme a las actuaciones que obren en el expediente electrónico con la finalidad de reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública y garantizando el principio rector de máxima publicidad.

**TERCERO. Del estudio de las causas de improcedencia.**

El estudio de las causas de improcedencia que se hagan valer por las partes o que se advierta de oficio por este Resolutor debe ser objeto de análisis previo al estudio de fondo del asunto ya que el estudio de los presupuestos procesales sobre el inicio o trámite de un proceso genera eficacia jurídica de las resoluciones, más aún que se trata de una figura procesal adoptada en la ley de la materia la cual impide su estudio y resolución cuando una vez admitido el recurso de revisión se advierta una causa de improcedencia que permita sobreseer el recurso de revisión sin estudiar el fondo del asunto; circunstancias anteriores que no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia, ya que éste no se coarta por regular causas de improcedencia y sobreseimiento con tales fines[[1]](#footnote-1).

Por lo que una vez que se analizó el expediente en estudio se cae en la cuenta de que no se actualiza ninguna de las casuales a continuación transcritas:

*“****Artículo 191.*** *El recurso será desechado por improcedente cuando:*

*I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la presente Ley, a partir de la respuesta;*

*II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial de la Federación algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente;*

*III. No actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;*

*IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley;*

*V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;*

*VI. Se trate de una consulta, o trámite en específico; y*

*VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos.”*

Ya que no fue interpuesto de forma extemporánea, no se está tramitando ante el Poder Judicial Federal, no es una consulta, o trámite en específico, ni tampoco se advierte que el recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, por lo que al no existir causas de improcedencia invocadas por las partes ni advertidas de oficio, este Órgano Garante de la Transparencia se avoca al análisis del fondo del asunto que nos ocupa.

Así las cosas, al no existir causas de improcedencia invocadas por las partes ni advertidas de oficio por este Resolutor, se procede al análisis del fondo de los asuntos en los siguientes términos.

**CUARTO. Del estudio y resolución del asunto.**

Ahora bien, se procede al análisis del presente recurso, así como al contenido íntegro de las actuaciones que obran en el expediente electrónico, para así estar en posibilidad este Órgano Colegiado de dictar el fallo correspondiente conforme a derecho, tomando en consideración los elementos aportados por las partes y apegándose en todo momento al principio de máxima publicidad consagrado en nuestra Constitución Federal, Local y demás leyes aplicables en la materia, así como en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en concordancia con el artículo 8, de la Ley de Transparencia local.

En este sentido nuestro estudio versará en determinar si la información remitida mediante respuesta y, en alcance en informe justificado, colma el derecho de acceso a la información solicitado por laparte **Recurrente**, para ello analizaremos lo solicitado y la información proporcionada.

**REQUERIMIENTOS SOLICITADOS:**

1. La convocatoria.
2. Los exámenes teórico y práctico.
3. Las actas en que consten los exámenes orales.
4. Los documentos relacionados con el Concurso de Oposición para ocupar las plazas de Secretario de Acuerdos, en los que resultaron seleccionados los servidores públicos Joaquín García Domínguez y Tomás Gabriel Esquivel Gil.

Atento a la solicitud de información **El Sujeto Obligado**, emitió su respuesta en la cual, mediante el oficio número **TJA/UIPPE/091/2024**, firmado por la Servidora Pública Habilitada del Instituto de Justicia Administrativa, informó lo siguiente:

| **Solicitud de Información** | **Respuesta** | **Cumplimiento** |
| --- | --- | --- |
| Convocatoria | No hubo pronunciamiento por parte del **Sujeto Obligado**. | **No** |
| Exámenes teórico y práctico | Informó que la divulgación de la información representa un riesgo real demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que este Instituto de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, es el encargado de elaborar los exámenes y evaluaciones que tienen la finalidad de evaluar y ponderar los conocimientos y habilidades necesarias que deben de tener los aspirantes a acceder a una plaza vacante dentro de este Tribunal, por ello, no es posible acceder a la solicitud del particular, ya que la información requerida es considerada **RESERVADA** toda vez que, lo exámenes contienen reactivos, elaborados de conformidad con la necesidades que se requieren y aplican a cada plaza de forma individual en referencia, a su vez, con las legislaciones aplicables a este Tribunal, por lo que son reutilizables en otros procesos de evaluación y de proporcionarse, los participantes conocerían anticipadamente los contenidos de los exámenes.  Sirve de apoyo a lo antes mencionado el criterio 05/2014, emitido Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que a letra dice  ***Baterías de pruebas, preguntas, reactivos y opciones de respuesta. Procede su clasificación cuando son reutilizables en otros procesos deliberativos.*** *Cuando se soliciten documentos que contengan baterías de pruebas, preguntas, reactivos y opciones de respuesta, empleadas en los procesos de evaluación de capacidades, conocimientos, desempeño, habilidades, entre otros, que sean reutilizables, procede reservar dichas herramientas, de conformidad con lo previsto en el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que con base en éstas los servidores públicos deliberan y adoptan determinaciones en los procesos de evaluación en curso o en subsecuentes. Su entrega, afectaría la efectividad de las evaluaciones, ya que los participantes conocerían con anticipación el contenido de las pruebas obteniendo una ventaja frente al resto de los evaluados. Por las mismas razones también procede reservar las respuestas asentadas por los participantes, inclusive las de quienes hayan resultado ganadores en los procesos, cuando de éstas pueda inferirse el contenido de los reactivos o preguntas que componen las evaluaciones.*  ***Precedentes:***   * *Acceso a la información pública. RDA 318/13. Sesión del 06 de marzo de 2013. Votación por unanimidad. Con voto particular de la Comisionada Sigrid Arzt Colunga. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño.* * *Acceso a la información pública. RDA 1473/13. Sesión del 15 de mayo de 2013. Votación por unanimidad. Con voto particular de la Comisionada María Elena Pérez-Jaén Zermeño. Servicio de Administración Tributaria. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño.* * *Acceso a la información pública. RDA 1652/13. Sesión del 05 de junio de 2013. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Procuraduría General de la República. Comisionado Ponente Gerardo Laveaga Rendón.* * *Acceso a la información pública. RDA 2965/13. Sesión del 07 de agosto de 2013. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Instituto Politécnico Nacional. Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldívar.* * *Acceso a la información pública. RDA 2696/13. Sesión del 14 de agosto de 2013. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Instituto Nacional de Migración. Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga.*   Adicionalmente, informó que la documentación pertinente ha sido debidamente clasificada como **RESERVADA**,de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y se encuentra detalla en los índices de expedientes reservados bajo el folio **00165/TRIJAEM/IP/2023**, decidido en la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del TRIJAEM, con fecha de clasificación el 10 de julio de 2023. | **Parcialmente**  *(No remitió el Acta de la Sesión del Comité mediante la cual, se clasificó la información como* ***RESERVADA****)* |
| Actas en que consten los exámenes orales. | Remitió la versión pública del **Acta del Jurado Calificador para las evaluaciones de 13 aspirantes a ocupar 9 plazas vacantes** de fecha 23 de septiembre de 2020 y; **Acta del Procesos de Evaluación para ocupar 28 plazas vacantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México** de fecha 09 de julio de 2021. | **Parcialmente**  *(No remitió el Acta de la Sesión del Comité mediante la cual, se clasificó la información inmersa en los diversos documentos como* ***CONFIDENCIAL****)* |
| Todos los documentos relacionados con el Concurso de Oposición para ocupar las plazas de Secretario de Acuerdos. | Oficio número **TJAEM-IJA-212/2021**, suscrito por el Director del Instituto de Justicia Administrativa, en el cual, notificó al **C. TOMAS GABRIEL ESQUIVEL GIL**, que el Jurado Calificador, determinó declararlo ganador.  Remitió el ocio número **TJA-P-376/2021**, firmado por la Magistrada Presidenta del TRIJAEM, mediante el cual, solicitó al Director del Instituto de Justicia Administrativa, realizar las gestiones correspondientes para la aplicación de exámenes de aptitudes a los candidatos propuestos por los titulares de las diversas Salas Regionales y Secciones de la Sala Superior.  Oficio número **TJA-P-SP-193/2020**, signado por la Secretaria Particular de la Presidencia del TRIJAEM, mediante el cual, solicitó a la Encargada del Despacho del Instituto de la Justicia Administrativa, programar y aplicar el examen de conocimientos respectivo, a los candidatos propuestos por los titulares de las unidades administrativas, que aspiran a obtener las plazas vacantes que se encuentran disponibles para ocupación.  Oficio número **TJA-P-347/2020**, firmado por la Magistrada Presidente del TRIJAEM, mediante el cual, solicitó a la Encargada del Despacho del Instituto de Justicia Administrativa, realizar las gestiones correspondientes para la aplicación de exámenes de conocimientos a dos candidatos **(Joaquín García Domínguez)**.  Oficio número **TJA-P-346/2020**, suscrito por la Magistrada Presidente del TRIJAEM, dirigido al Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado de la Primera Sala Regional con sede en Toluca, México; mediante el cual, somete a consideración las propuestas para ocupar la plaza de “Secretario Proyectista” que se encuentra vacante en dicha Sala, citando como candidato al profesionista **Joaquín García Domínguez**.  Asimismo, remitió el *Curriculum Vitae* de los servidores públicos referidos en la solicitud de información. | **Sí** |

Es así que, derivado de la respuesta emitida por el **Sujeto Obligado**, el **Recurrente**, interpuso el presente recurso de revisión, señalando en sus razones o motivos de la inconformidad, lo siguiente: *“La respuesta del sujeto obligado, viola en perjuicio de la suscrita el Derecho Humano de Acceso a la Información, determinado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 4 de la Carta Democrática Interamericana; así como IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; ello en virtud de las razones siguientes:* ***1.- Porque el sujeto obligado afirma, que la “divulgación” de la información solicitada por la suscrita, “representa un riesgo real, demostrable e identificable en perjuicio significativo al interés público”, debido a que los exámenes de evaluación contienen reactivos que son reutilizables en otros procesos de evaluación, por lo que los participantes podrían conocer anticipadamente el contenido de los exámenes, sustentando su afirmación en el Criterio 5/14*** *del otrora Instituto Federal de Acceso a la Información; sin embargo, el sujeto obligado por alto que la dicente no solicitó únicamente los exámenes de conocimiento,* ***sino todos y cada uno de los documentos generados y relacionas con el proceso de promoción a que se refiere el Capítulo Décimo Tercero del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa, que incluye desde la aprobación y publicación de la convocatoria respectiva, hasta el acta final de designación, lo que supone además de los exámenes de oposición, la solicitud de participación en el concurso en el que se presenten los requisitos previstos en la convocatoria, dentro de los que se encuentra el currículum vítae, título y cédula profesional, constancias de cursos de capacitación con valor curricular vinculados a la plaza por la que se concursa y las constancias de nombramiento que acrediten la carrera jurisdiccional****, en su caso, INFORMACIÓN RESPECTO DE LA CUAL NO SE PRONUNCIÓ EL SUJETO OBLIGADO. 2.- Porque de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, párrafo 1 incisos a), b) y d) de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, así como 10 de los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura (aprobados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el trece de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco); es obligación inexcusable del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, que los procedimientos de ingreso y selección a que se refiere el Capítulo Décimo Tercero de su Reglamento Interior, ESTE SUSTENTADO EN LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA, ASÍ COMO CRITERIOS OBJETIVOS DE MÉRITO, LA EQUIDAD Y LA APTITUD, máxime cuando se trata de cargos públicos que se consideren vulnerables a la corrupción. Luego entonces y acorde con un control convencional, por estar vinculados al control social que garantiza el Derecho Humano de Acceso a la Información,* ***todos los procesos de selección de personal deben ser trasparentes, a efecto de que la sociedad pueda constatar que las personas seleccionadas para ocupar un cargo, cumplen con los requisitos legales para ello y que tienen la aptitud necesaria para realizar sus funciones, máxime cuando se trata de un órgano jurisdiccional, aducir lo contrario resultaría inconvencional****.* ***3.- Porque no es creíble, lógico ni racional, que en todos los exámenes de oposición de formulen las mismas preguntas a los aspirantes****, considerando que la selección del personal se basa en un sistema de carrera jurisdiccional, donde los que no obtienen la plaza tienen la oportunidad de volver a participar, de ahí que al conocer los reactivos, en un nuevo examen los coloca en una ventaja sobre los que participan por primera vez, sin dejar de mencionar que los que resultan elegidos para el cargo pueden divulgar las preguntas con el objeto de beneficiar a alguien en una próxima convocatoria, SUPUESTOS QUE HACEN PROPICIA LA CORRUPCIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS.* ***En virtud de ello y por encontrarse dentro de sus facultades, ese Instituto tiene la posibilidad de constatar si es verdad que en todos los exámenes se realizan las mismas preguntas.******4.- Porque se considerar que la información es clasificada, debió de emitirse la declaración correspondiente por parte del Titular del Área, misma que debió ser confirmada por el Comité de Transparencia****, LO QUE NO SUCEDIÓ EN EL PRESENTE ASUNTO.”* (Sic).

Por ello, resulta claro que la parte **Recurrente** añade nuevos puntos a su solicitud de información y se aleja de la materia que dio origen a la respuesta del **Sujeto Obligado.**

A mayor abundamiento, los nuevos puntos de la solicitud son considerados “***plus petitio”***y no son susceptibles de ser valorados, destacando que el primero de ellos se trata de documentos no enunciados en la solicitud de información (***título y cédula profesional, constancias de cursos de capacitación con valor curricular vinculados a la plaza por la que se concursa y las constancias de nombramiento que acrediten la carrera jurisdiccional***).

Viene a colación, el artículo 36 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por el cual este Instituto no está facultado para resolver con respecto a ampliaciones a solicitudes de información presentadas por medios distintos a los que señala el artículo 155 del multicitado ordenamiento, por lo que el recurso de revisión no constituye un medio válido para solicitar información adicional.

Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia No. 29 visible a foja 19 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Común, Primera Parte, Tesis de la Suprema Corte de Justicia, que señala:

***“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ESTAR EN RELACIÓN DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA***

***Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la sentencia que se recurre****, y forzosamente deben contener, no sólo la cita de las disposiciones legales que se estimen infringidas y su concepto, sino también la concordancia entre aquellas, este y las consideraciones que fundamenten esa propia sentencia, pues de adoptar lo contrario, resultaría la introducción de nuevas cuestiones en la revisión, que no constituyen su materia, toda vez que esta se limita al estudio integral del fallo que se combate, con vista de los motivos de inconformidad que plantean los recurrentes.”* ***[Sic]***

Por lo anterior, se establece que dentro del recurso de revisión presentado por **La Recurrente** no debe variar el fondo de *la litis,* de tal manera que la manifestación a que se ha hecho referencia y que fue vertida en sus motivos de inconformidad, resulta notoriamente improcedente, pues este Órgano Garante se encuentra imposibilitado para satisfacer requerimientos que no fueron formulados en tiempo y forma.

De igual manera, tiene aplicación al respecto por analogía, la tesis aislada número I.8o.A.136 A, de la Novena Época, publicada en el Seminario Oficial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2887, con número de registro 167607, que lleva por rubro y texto los siguientes:

***“TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU PETICIÓN INICIAL.***

*Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se señalen y que, por otra parte,* ***el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados;*** *también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos obligados****, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se encuentran en sus archivos –los solicitados- y que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren.***

*OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.”* ***[Sic]***

De manera complementaria, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha sostenido la improcedencia de ampliar las solicitudes de información pública o de datos personales a través de la interposición del recurso de revisión, como se estima acontece en el anterior asunto. Lo anterior de conformidad con el criterio 27/10; por lo que este Órgano Garante insiste en la imposibilidad de entrar al estudio de información novedosa. Criterio que es de la literalidad siguiente:

***“ES IMPROCEDENTE AMPLIAR LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA O DATOS PERSONALES, A TRAVÉS DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN***

***En aquellos casos en los que los recurrentes amplíen los alcances de la solicitud de información o acceso a datos personales a través de un recurso de revisión, esta******ampliación no podrá constituir materia del procedimiento a sustanciarse*** *por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Lo anterior, sin perjuicio de que los recurrentes puedan ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud en términos de la Ley de la materia.*

*Expedientes: 5871/08 Secretaría de Educación Pública –Alonso Gómez- Robledo Verduzco 3468/09 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado – Ángel Trinidad Zaldívar 5417/09 Procuraduría General de la República - María Marván Laborde1523 1006/10 Instituto Mexicano del Seguro Social – Sigrid Arzt Colunga 1378/10 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado – María Elena Pérez-Jaén Zermeño.”* ***[Sic]***

Por lo que, en la etapa de manifestaciones, el **Sujeto Obligado** remitió la siguiente información:

* ***“ACTA DE LA 1RA SESIÓN ORD 2023 V.P ACTAS DEL IJA.pdf”:***Archivo que contiene el Acta de la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, de fecha diez de julio del dos mil veintitrés, mediante la cual, aprobaron el índice de los expedientes clasificados como reservados, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2023 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, de conformidad con el artículo 92fracción XIX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, al Décimo Tercero y Décimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y / desclasificación de la información.
* ***“ACUERDO C.T IJA VERSIÓN PÚBLICA ACTAS DE EVALUACIÓN.pdf”:*** Contiene el Acuerdo del Comité de Transparencia número **TJAE/CTNIII/ORD-01/2023**, de fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se aprobó la clasificación de la información como **CONFIDENCIAL** para la elaboración de la versión pública de las Actas de Evaluación para ocupar plazas vacantes del Tribunal de Justicia Administrativa Del Estado De México del índice del Instituto de Justicia Administrativa, los datos referentes al nombre de personas físicas; calificación y trayectoria académica.
* ***“version publica 11042024\_Censurado.pdf”:*** Consta de los Cuadros de Clasificación como información **CONFIDENCIAL**, lo relativo a la fotografía, Acta de Nacimientos, Credencial para Votar, de los documentos relacionados con los Servidores Públicos referidos en la solicitud de información.
* ***“26. EXTRAORDINARIA.pdf”:*** Acta de la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria **TJAEM/CT/EXT-26/2023**; en la que, el Comité de Transparencia aprobó la clasificación de la información como **CONFIDENCIAL** para la elaboración de la versión pública y como **RESERVADA** de la información relativa a los nombres y exámenes del índice del Instituto de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, relativos a la solicitud de acceso a la información identificada con número de folio **001651TRIJAEM/IP/2023**.
* ***“MANIFESTACIONES INSTITUTO DE JUSTICIA.pdf”:*** Oficio número **TRIJAEM-IJA-283/2024**, firmado por el Servidor Público del Instituto de Justicia Administrativa, en el que indicó que, respecto a las convocatorias, estás son aplicables al concurso abierto o cerrado de oposición, de conformidad con el artículo 73 primer párrafo, del Reglamento Interior del Tribunal.

*"****Articulo 73.*** *El ingreso y promoción del personal a que se refiere el artículo anterior podrá realizarse a través de concurso abierto o cerrado de oposición, cuya instrumentación estará a cargo del Instituto en términos de los acuerdos que para tal efecto emita la Junta."*

Del cual una vez analizado, se puede comprender que la palabra **"podrá"** utilizada en el contexto del texto normativo del Artículo 73, indica permisividad o facultad, más que una obligación.

**Es decir, señala que existe la posibilidad de realizar una acción, pero no impone la necesidad de hacerlo de manera obligatoria, apoyando a diferenciar entre lo que es posible o permitido y lo que es mandatorio.** Es por ello que, de este análisis se puede comprender que los procesos de ingreso y promoción tienen la opción de ser llevados a cabo mediante concursos de oposición (abiertos o cerrados), y que estos concursos no sean la única vía para el ingreso o promoción, sino que abre la posibilidad para que puedan existir otras formas de ingreso y promoción.

Por este motivo, se incluyeron en la documentación entregada al solicitante, en respuesta a la solicitud número **00052/TRIJAEM/IP/2024**, a través del oficio **TRIJAEM-IJA-221/2024**, los documentos previamente emitidos por la Presidencia de este Tribunal. Estos documentos se adjuntan nuevamente al presente.

Respecto a los exámenes teóricos y prácticos, este Instituto solicita su apoyo para que tenga a bien proporcionar en el informe requerido, lo correspondiente a la documentación sobre información clasificada como **RESERVADA**, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y que se encuentra detallada en los índices de expedientes reservados bajo el folio **00165/TRIJAEM/IP/2023**, decidido en la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del TRIJAEM, con fecha de clasificación el 10 de julio de 2023; en donde se **RESERVA** la información "Nombres y exámenes del índice del Instituto de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México relativos a la solicitud de acceso a la información identificada con número de folio **00165/TRIJAEM/IP/2023**".

En cuanto a las actas en que consten los exámenes orales, se anexan nuevamente al presente las actas en versión pública correspondientes de las evaluaciones realizadas, así mismo, se solicita a Usted el apoyo a fin de que se pueda proporcionar al particular la documental que acredite la autorización de las versiones públicas.

En relación a los documentos relacionados con el Concurso de Oposición para ocupar las plazas de Secretario de Acuerdos, en los que resultaron seleccionados los servidores públicos **JOAQUÍN GARCÍA DOMÍNGUEZ** y **TOMÁS GABRIEL ESQUIVEL GIL**, se indica al particular que posterior a realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva dentro del archivo de este Instituto, se anexa al presente la versión publica de los mismos.

Por lo que, sometió a consideración del Comité de Transparencia, la información que se anexa al presente ocurso, mismo que se conforma como anteriormente se menciona, por los documentos solicitados en versión pública, así como, del cuadro de clasificación correspondiente; de conformidad con lo estipulado en los Artículos 3, fracción IX, 45, 46 fracción 1, 49 fracción IX y 143, fracción 1 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en relación con el diverso artículo 4, fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, el numeral trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. Artículo I fracción I, de los Lineamientos sobre medidas de seguridad aplicables a los sistemas de datos personales que se encuentran en posesión de los sujetos obligados de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México y demás legislación aplicable.

* ***“acuerdo expedientes reservados.pdf”:*** Consta del Acuerdo número **TJAEM/CTN/EXT-2612023**, relativo a la actualización del índice de los expedientes clasificados como **Reservados**, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2023 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, de fecha diez de julio del dos mil veintitrés, de conformidad con lo ordenado en el Acta de la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, se advierten los expedientes que se encuentran como reservados que comprenden el periodo de enero a julio de 2023.
* ***“INFORME JUSTIFICADO RR\_01285\_SOL\_00052.pdf”:*** Oficio de fecha 17 de abril de 2024, firmado por la Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación del TRIJAEM, mediante el cual, indicó que adjuntaba los documentos proporcionados por el Instituto de Justicia Administrativa.
* ***“ACTAS.pdf”:*** Archivo que contiene la versión Publica del **Acta del Jurado Calificador para las evaluaciones de 13 aspirantes a ocupar 9 plazas vacantes** de fecha 23 de septiembre de 2020 y el **Acta del Procesos de Evaluación para ocupar 28 plazas vacantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México** de fecha 09 de julio de 2021.
* ***“VII. ACUERDO SOLICITUD RR\_01285\_ SOL\_152.pdf”:*** Consta del Acuerdo número **TJAEM/CTN/VII/ORD-06/2024**, de fecha doce de abril del dos mil veinticuatro, mediante el cual, el Comité de Transparencia aprobó la clasificación de la información como **CONFIDENCIAL** para la elaboración de la versión pública relativa a la solicitud de acceso a la información número **00052/TRIJAEM/IP/2024** para dar atención al recurso de revisión número **01285/1NFOEM/IP/RR/2024**, relativo a los datos concernientes al: CURP; domicilio particular; credencial para votar; fecha de nacimientos; nacionalidad, nombre de particulares; parentesco; firmas, huella dactilar y sexo.
* ***“ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.pdf”:*** Consta del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México de fecha doce de abril de dos mil veinticuatro, en la que, fue aprobado por unanimidad de votos el Acuerdo número **TJAEM/CTN/VII/ORD-06/2024**, la clasificación de la información como **CONFIDENCIAL** para la elaboración de la versión pública relativa a la solicitud de acceso a la información número **00052/TRIJAEM/IP/2024** para dar atención al recurso de revisión número **01285/1NFOEM/IP/RR/2024**.

En este sentido, debe dejarse claro que, al haber existido un pronunciamiento por parte del **Sujeto Obligado**, este Instituto no está facultado para manifestarse sobre la veracidad del mismo, pues no existe precepto legal alguno en la Ley de la materia que lo faculte para, vía recurso de revisión, pronunciarse al respecto.

Ante ello, es de señalar que el artículo 4, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, dispone:

*“****Artículo 4.*** *…*

*Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.”*

Del precepto legal invocado, se desprende, que la información generada, obtenida, adquirida, transmitida, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, será accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información.

Por su parte, el artículo 12, de la Ley de la materia establece que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información que generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven, y sólo facilitarán las que se les requiera y obre en sus archivos, en el estado en el que se encuentre, sin la obligación de generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones; tal y como se señala a continuación:

*“****Artículo 12.*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

*Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.”*

En síntesis, el derecho de acceso a la información pública se satisface en aquellos casos en que se entregue el soporte documental en que conste la información pública, asimismo, el artículo 24, de la Ley de la materia, dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el derecho de acceso a la información pública.

En esta misma tesitura, el derecho de acceso a la información pública, consiste en que la información solicitada conste en un soporte documental en cualquiera de sus formas, a saber: **expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias** de los Sujetos Obligados; los que, podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, de conformidad con el artículo 3, fracción XI, de la Ley de la materia, el cual dispone lo siguiente:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*(…)*

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro* ***registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados****, sus servidores públicos e integrantes,* ***sin importar su fuente o fecha de elaboración.*** *Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;*

*(…)”*

Además, es importante señalar que el artículo 18, de la Ley en la materia, los Sujetos Obligados cuenta con la obligación de documentar todos los actos que derive de sus atribuciones, funciones y competencia desde su origen la eventual y reutilización de la información que generen, por lo tanto toda la información que sea generada, posea y administre, es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad de la misma, por lo tanto esta debe ser proporcionada siempre y cuando se halle en los archivos documentales de los Sujeto Obligados y en las condiciones que se encuentre, la cual no podrá sufrir modificaciones o procesamiento, no presentarla conforme a los interés de los particulares, como de igual forma los Sujeto Obligados no deberán de generar, resumir o efectuar cálculos o practicar investigaciones.

De la misma forma, de acuerdo al contenido del artículo 160, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra dispone:

***Artículo 160****. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.*

Sirve como apoyo a lo anterior, el criterio 09-10, emitido por el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que a la letra dice:

***“Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para responder una solicitud de acceso a la información.****Tomando en consideración lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que deben garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada.” (Sic)*

Además, a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, prevé en su artículo 23, fracción V, que son Sujetos Obligados a Transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos que obren en su poder:

***Artículo 23.*** *Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder:*

***V.*** *Los órganos autónomos;*

Por lo que, de la respuesta emitida por parte del **Sujeto Obligado** generó, se enuncia cada una de las respuestas proporcionadas, con la finalidad de saber si se da cumplimiento a todos los requerimientos y si lo motivos de inconformidad resultan procedentes, de conformidad con lo siguiente:

Expuesto lo anterior, se procede al análisis de la totalidad de las constancias que integran el expediente electrónico del **SAIMEX**, a efecto de determinar si con la información remitida por **El Sujeto Obligado** a través de su respuesta y la información remitida en informe justificado, colma lo requerido en dicha solicitud, por lo que, desglosaremos los puntos en los que se adolece el particular, el cual, versa en lo siguiente:

* La respuesta del sujeto obligado, viola en perjuicio de la suscrita el Derecho Humano de Acceso a la Información, en virtud de las razones siguientes:…
* 1.- Porque el sujeto obligado afirma, que la “divulgación” de la información solicitada por la suscrita, “representa un riesgo real, demostrable e identificable en perjuicio significativo al interés público”, debido a que los exámenes de evaluación contienen reactivos que son reutilizables en otros procesos de evaluación, por lo que los participantes podrían conocer anticipadamente el contenido de los exámenes, sustentando su afirmación en el Criterio 5/14 del otrora Instituto Federal de Acceso a la Información; sin embargo, el sujeto obligado por alto que la dicente no solicitó únicamente los exámenes de conocimiento, sino todos y cada uno de los documentos generados y relacionas con el proceso de promoción a que se refiere el Capítulo Décimo Tercero del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa...
* 2.-…es obligación inexcusable del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, que los procedimientos de ingreso y selección a que se refiere el Capítulo Décimo Tercero de su Reglamento Interior, este sustentado en los principios de eficiencia y transparencia, así como criterios objetivos de mérito, la equidad y la aptitud, máxime cuando se trata de cargos públicos que se consideren vulnerables a la corrupción. Luego entonces y acorde con un control convencional, por estar vinculados al control social que garantiza el Derecho Humano de Acceso a la Información, todos los procesos de selección de personal deben ser trasparentes, a efecto de que la sociedad pueda constatar que las personas seleccionadas para ocupar un cargo, cumplen con los requisitos legales para ello y que tienen la aptitud necesaria para realizar sus funciones, máxime cuando se trata de un órgano jurisdiccional, aducir lo contrario resultaría inconvencional.
* 3.- Porque no es creíble, lógico ni racional, que en todos los exámenes de oposición de formulen las mismas preguntas a los aspirantes, considerando que la selección del personal se basa en un sistema de carrera jurisdiccional, donde los que no obtienen la plaza tienen la oportunidad de volver a participar, de ahí que al conocer los reactivos, en un nuevo examen los coloca en una ventaja sobre los que participan por primera vez, sin dejar de mencionar que los que resultan elegidos para el cargo pueden divulgar las preguntas con el objeto de beneficiar a alguien en una próxima convocatoria, supuestos que hacen propicia la corrupción en la asignación de plazas. En virtud de ello y por encontrarse dentro de sus facultades, ese Instituto tiene la posibilidad de constatar si es verdad que en todos los exámenes se realizan las mismas preguntas.
* 4.- Porque se considerar que la información es clasificada, debió de emitirse la declaración correspondiente por parte del Titular del Área, misma que debió ser confirmada por el Comité de Transparencia, lo que no sucedió en el presente asunto.

Por lo que, recapitularemos mediante el siguiente cuadro comparativo, lo remitido por parte del **Sujeto Obligado** en alcance al informe justificado:

| **Solicitud de Información** | **Información remitida en Informe Justificado** | **Cumplimiento** |
| --- | --- | --- |
| Convocatoria | El Servidor Público del Instituto de Justicia Administrativa, indicó que, respecto a las convocatorias, estás son aplicables al concurso abierto o cerrado de oposición, de conformidad con el artículo 73 primer párrafo, del Reglamento Interior del Tribunal.  *"****Articulo 73.*** *El ingreso y promoción del personal a que se refiere el artículo anterior podrá realizarse a través de concurso abierto o cerrado de oposición, cuya instrumentación estará a cargo del Instituto en términos de los acuerdos que para tal efecto emita la Junta."*  Del cual una vez analizado, se puede comprender que la palabra **"podrá"** utilizada en el contexto del texto normativo del Artículo 73, indica permisividad o facultad, más que una obligación.  **Es decir, señala que existe la posibilidad de realizar una acción, pero no impone la necesidad de hacerlo de manera obligatoria, apoyando a diferenciar entre lo que es posible o permitido y lo que es mandatorio.** Es por ello que, de este análisis se puede comprender que los procesos de ingreso y promoción tienen la opción de ser llevados a cabo mediante concursos de oposición (abiertos o cerrados), y que estos concursos no sean la única vía para el ingreso o promoción, sino que abre la posibilidad para que puedan existir otras formas de ingreso y promoción. | **Sí**  *(Hechos Negativos)* |
| Exámenes teórico y práctico | Remitió el Acuerdo número **TJAEM/CTN/EXT-2612023**, relativo a la actualización del índice de los expedientes clasificados como **Reservados**, **correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2023** del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, de fecha diez de julio del dos mil veintitrés, de conformidad con lo ordenado en el Acta de la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, se advierten los expedientes que se encuentran como reservados que comprenden el periodo de enero a julio de 2023. | **Parcialmente**  *(No remitió el Acuerdo de clasificación de la información como* ***RESERVADA****, debidamente fundado ni motivado)* |
| Actas en que consten los exámenes orales. | Remitió el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México de fecha doce de abril de dos mil veinticuatro, en la que, fue aprobado por unanimidad de votos el Acuerdo número **TJAEM/CTN/VII/ORD-06/2024**, la clasificación de la información como **CONFIDENCIAL** relativo a los datos concernientes al: **CURP**; **domicilio particular**; **credencial para votar**; **fecha de nacimiento**; **nacionalidad**, **nombre de particulares**; **parentesco**; **firmas**, **huella dactilar** y **sexo**; para la elaboración de la versión pública relativa a la solicitud de acceso a la información número **00052/TRIJAEM/IP/2024** para dar atención al recurso de revisión número **01285/1NFOEM/IP/RR/2024**, correspondiente al **Acta del Jurado Calificador para las evaluaciones de 13 aspirantes a ocupar 9 plazas vacantes** de fecha 23 de septiembre de 2020 y el **Acta del Procesos de Evaluación para ocupar 28 plazas vacantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México** de fecha 09 de julio de 2021. | **Parcialmente**  *(Testó datos que se consideran públicos al ser requisitos para acceder al concurso, como lo son la nacionalidad y la edad)* |
| Todos los documentos relacionados con el Concurso de Oposición para ocupar las plazas de Secretario de Acuerdos. | Se incluyeron en la documentación entregada al solicitante, en respuesta a la solicitud número **00052/TRIJAEM/IP/2024**, a través del oficio **TRIJAEM-IJA-221/2024**, los documentos previamente emitidos por la Presidencia de este Tribunal, dichos documentos los adjuntó nuevamente. | **Sí** |

Así que, de las constancias que obran en el expediente se logra vislumbrar que el **Sujeto Obligado** turnó la solicitud de información, a la **Dirección del Instituto de Justicia Administrativa**, por lo que, es necesario hacer referencia al procedimiento de búsqueda que deben de seguir los Sujetos Obligados para localizar la información, el cual se encuentra previsto en los artículos 160 y 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, mismo que es el siguiente:

* Las Unidades de Transparencia garantizarán que las solicitudes de acceso a la información se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla -de acuerdo a las facultades, competencias y funciones-, con el objeto de que dichas áreas realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información requerida, y

* Los sujetos obligados otorgaran acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes.

Así, a efecto de determinar si el **Sujeto Obligado** cumplió con el procedimiento de búsqueda, resulta necesario traer a estudio el **Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México**, en el cual se establece que, para el ejercicio de sus funciones, contará con las siguientes atribuciones:

***Artículo 67.*** *La Dirección del Instituto, además de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica, llevará a cabo lo siguiente:*

***I.*** *Acordar con las áreas jurídicas y administrativas del Tribunal los asuntos que le encomiende la Presidencia y la Vicepresidencia.*

***II.*** *Organizar reuniones de capacitación y actualización del personal jurídico y administrativo.*

***III.*** *Implementar, desarrollar y ejecutar un programa de capacitación permanente para las y los servidores públicos del Tribunal, de la cual deberá llevar un registro.*

***IV.*** *Las demás que le sean asignadas por disposición legal, por el Pleno, la Junta, la Presidencia y la Vicepresidencia del Tribunal.*

*(…)*

***Artículo 78.*** *Para el ingreso y promoción del personal administrativo, la Dirección del Instituto aplicará a las personas interesadas un examen de aptitud, sobre cuestiones relacionadas con la plaza, observando en lo conducente las disposiciones sobre el concurso interno de oposición.*

*(…)*

Así se logra vislumbrar que el **Sujeto Obligado** cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, pues si bien, turnó la solicitud de información al área competente; no obstante, de conformidad con el contenido de los documentos descritos previamente, podemos concluir que, **se obvia el estudio del marco normativo** que rige el actual del **Sujeto Obligado**, ello atendiendo que, el estudio de la fuente obligacional se realiza con la finalidad de determinar si éste se encuentra obligado a generarla, poseerla o administrarla en ejercicio de sus atribuciones, pero en los casos en que dé la respuesta, acepta o bien otorga indicios de que cuenta con ella, seria ocioso delimitar las norma jurídica que determine si cuenta con ella o no.

Ahora bien, respecto del punto relacionado a la **Convocatoria** relacionados con el Concurso de Oposición para ocupar las plazas de Secretario de Acuerdos. En los que resultaron seleccionados los servidores públicos Joaquín García Domínguez y Tomás Gabriel Esquivel Gil; el Sujeto Obligado mediante informe justificado, indicó que, respecto a las convocatorias, estás son aplicables al concurso abierto o cerrado de oposición, de conformidad con el artículo 73 primer párrafo, del Reglamento Interior del Tribunal.

Es decir, señala que existe la posibilidad de realizar una acción, pero no impone la necesidad de hacerlo de manera obligatoria, apoyando a diferenciar entre lo que es posible o permitido y lo que es mandatorio. Es por ello que, de este análisis se puede comprender que los procesos de ingreso y promoción tienen la opción de ser llevados a cabo mediante concursos de oposición (abiertos o cerrados), y que estos concursos no sean la única vía para el ingreso o promoción, sino que abre la posibilidad para que puedan existir otras formas de ingreso y promoción.

No obstante, dicho pronunciamiento deja en estado de indefensión al particular, ya que, no afirmó que no la tuviera, pues se aprecia que en dicho pronunciamiento únicamente se indica que puede ser con convocatoria o no. Por lo que, dicho punto no queda colmando con el pronunciamiento del Servidor Públicos Habilitado de la Dirección del Instituto de Justicia Administrativa, cuyas atribuciones se encuentran referidas en párrafos anteriores; por lo que, es dable ordenar la entrega de la convocatoria del Concurso de Oposición para ocupar las plazas de Secretario de Acuerdos, en la que resultaron seleccionados los Servidores Públicos referidos en la solicitud de información.

En segundo lugar, respecto a los **exámenes teórico y práctico relacionados con el Concurso de Oposición para ocupar las plazas de Secretario de Acuerdos**; el **Sujeto Obligado** informó en respuesta que, la documentación pertinente ha sido debidamente clasificada como **RESERVADA**, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y se encuentra detalla en los índices de expedientes reservados bajo el folio **00165/TRIJAEM/IP/2023**, decidido en la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del TRIJAEM, con fecha de clasificación el 10 de julio de 2023.

Y, en informe justificado remitió el Acuerdo número **TJAEM/CTN/EXT-2612023**, relativo a la actualización del índice de los expedientes clasificados como **Reservados**, **correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2023** del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, de fecha diez de julio del dos mil veintitrés, de conformidad con lo ordenado en el Acta de la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, se advierten los expedientes que se encuentran como reservados que comprenden el periodo de enero a julio de 2023.

Por lo que, este Instituto resalta que, si bien, por regla general, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública, debemos considerar que también hay excepciones, es decir, que se trate de información clasificada *(confidencial o reservada)*, en cuyo caso, se restringirá, excepcionalmente, el acceso conforme a lo señalado en la ley en la materia; entendiendo a esta información, de conformidad con el artículo 3, fracciones XXI, XXIII y XXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de la siguiente manera:

* **Información confidencial**: Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
* **Información privada:** La contenida en documentos públicos o privados que refiera a la vida privada y/o los datos personales, que no son de acceso público.
* **Información reservada:** La clasificada con este carácter de manera temporal por las disposiciones de esta Ley, cuya divulgación puede causar daño en términos de lo establecido por esta Ley.

En resumen, se determina que, excepcionalmente, la información pública, podrá ser clasificada como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por la Ley de Transparencia; así como confidencial, tratándose principalmente de aquella que refiera a la información privada y datos personales concernientes a una persona física.

Así, se tiene que los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información pública, pero también tienen la obligación de proteger los datos personales contenidos en la información en su poder, así como aquella que recaiga en alguna causal de reserva que señale la Ley.

De tal manera, se tiene que en el caso particular la clasificación invocada fue la de reserva, por lo que el estudio se centrará en este supuesto.

Asimismo y dado que la información solicitada por el **Recurrente**,y el Sujeto Obligado indicó los oficios relacionados a: procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas en tanto no hayan quedado firmes; que contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva; es conveniente mencionar que en el caso de dicha información aun siga en sustanciación, lo procedente sería clasificar la información como **RESERVADA** debido a que pudiera encontrarse en un proceso jurisdiccional, lo que actualiza lo previsto en los artículos 91 y artículo 140, de la Ley de Transparencia estatal, en los que se estipula lo siguiente:

***“Artículo 91.******El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada*** *o confidencial.*

*(…)*

***“Artículo 140.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:*

*I. Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;*

*II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;*

*III. Se entregue a la Entidad expresamente con ese carácter o el de confidencialidad por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;*

*IV. Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física;*

*V. Aquella cuya divulgación obstruya o pueda causar un serio perjuicio a:*

*1. Las actividades de fiscalización, verificación, inspección, comprobación y auditoría sobre el cumplimiento de las Leyes; o*

*2. La recaudación de las contribuciones.*

*VI. Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;*

***VII. La que contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada****;*

*VIII. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan quedado firmes;*

*IX. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;*

*X. El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público de conocer la información de referencia, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes;*

*Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes; y*

*XI. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.”*

En tal virtud, se tiene que las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información a fin de obtener la información pública que obre en posesión de los sujetos obligados; no obstante, este no es un derecho ilimitado, es decir, su ejercicio conlleva restricciones; situación que se robustece con la siguiente tesis[[2]](#footnote-2):

***“ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO****. Del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.", contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa.” (sic)*

Por su parte, en los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, prevé lo siguiente:

*“****Vigésimo cuarto.*** *De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley General, podrá considerarse como reservada, aquella información que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, cuando se actualicen los siguientes elementos:*

***I.*** *La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes;*

***II.*** *Que el procedimiento se encuentre en trámite;*

***III.*** *La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes, y*

***IV.*** *Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.*

Ahora bien, al reservar la información, en esencia, implica el reconocimiento por parte de la autoridad de que lo solicitado sí tiene el carácter de público y sí es susceptible de entregarse, es decir, de transparentarse; empero, advierte que existen causas presentes que impiden la publicidad de la información durante cierto periodo de tiempo; en otras palabras, hasta que dichas causas no concluyan, se podría causar algún daño con la apertura de la información.

De este modo, la información que se clasifica bajo la hipótesis de reserva, no pierde el carácter de pública, sino que se reserva temporalmente del conocimiento público, es decir que, por un tiempo determinado, se conservará y custodiará la información de manera especial, siendo que, transcurrido el plazo de reserva, el documento podrá divulgarse.

Por todo lo anterior, la reserva de la información implica una clasificación, la cual debe entenderse como el proceso mediante el cual el **Sujeto Obligado** determina que la información en su poder, actualiza alguno de los supuestos conforme a las normas aplicables.

En tal virtud, conforme al artículo 49, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los Comités de Transparencia, tienen la atribución de aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información, mientras que, el artículo 128 de la misma Ley, indica que, en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia, deberá confirmar, modificar o revocar la decisión, que para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán de señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al **Sujeto Obligado** a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento; siendo que, además, el **Sujeto Obligado** debe, en todo momento, aplicar una prueba de daño.

Dicho lo anterior, es necesario definir a la prueba de daño como la responsabilidad de los Sujetos Obligados de demostrar de manera fundada y motivada, que la divulgación de la información lesiona el interés debidamente protegido por la Ley, y que el menoscabo o daño que puede producirse con la publicidad de la información, es mayor que el interés de conocerla, por lo que debe clasificarse como reservada.

De este modo, conforme al artículo 132 en correlación con el numeral 49, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, para clasificar la información se debe de atender a lo dispuesto por la normativa y aplicar, de manera estricta, las excepciones del derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia, debiendo clasificar la información en el momento en que:

1. Se reciba una solicitud de acceso a la información.
2. Se determine mediante resolución de autoridad competente.
3. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.

Situación que se robustece con lo previsto en el artículo 141 de citada Ley, que señala que las causales de reserva previstas, se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la **prueba de daño**.

Igualmente, la clasificación de la información debe estar sustentada en el Acuerdo de Clasificación correspondiente, en el que, de manera fundada y motivada, se establezcan las hipótesis normativas aplicables al caso concreto y se analice la prueba de daño que prevé el artículo 129 de la Ley de Transparencia de mérito, para lo cual, los Sujetos Obligados deberán considerar que:

* La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública;
* El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y
* La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

De tal manera, las limitaciones al acceso a la información deben sustentarse en una adecuada clasificación que debe distinguir y tomar en cuenta qué información puede generar un daño desproporcionado o innecesario a valores jurídicamente protegidos.

Lo anterior encuentra sustento en la Tesis de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, sección Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 5, de fecha abril de 2014, pág. 1523, Registro, 2, 006,299. I.1o.A.E.3 K (10a.), que literalmente señala:

*“****INFORMACIÓN RESERVADA. APLICACIÓN DE LA "PRUEBA DE DAÑO E INTERÉS PÚBLICO" PARA DETERMINAR LO ADECUADO DE LA APORTADA CON ESA CLASIFICACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A EFECTO DE HACER VIABLE LA DEFENSA EFECTIVA DEL QUEJOSO.*** *Una adecuada clasificación de la información pública debe tomar en cuenta y distinguir, en el contexto general de un documento, cuál es la específica y precisa, cuya divulgación puede generar un daño desproporcionado o innecesario a valores jurídicamente protegidos, lo cual debe evitarse, en la medida de lo posible, frente a aquella que debe ser accesible al quejoso en el amparo para hacer viable su defensa efectiva y cuestionar violaciones a derechos fundamentales, lo que implica un interés público en abrir o desclasificar la información necesaria para ese efecto, cuando la autoridad responsable que la aporta al juicio la clasifica como reservada. Por tanto, es necesario distinguir esas diferencias y formular una idónea y adecuada clasificación de la información, generando así una regla individualizada y pertinente para el caso, a través de aplicar la "prueba de daño e interés público" ex officio, con el propósito de obtener una versión que sea pública para la parte interesada.” (sic)*

Por lo que, podemos advertir que la prueba de daño realizada por el **Sujeto Obligado**, cobra relevancia puesto que sí ésta no arroja resultados contundentes sobre un posible peligro, deberá de publicarse la información.

Siendo que, los Sujetos Obligados deben aplicar de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información, sin ampliar las excepciones y supuestos de reserva previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o la Ley local, aduciendo analogía o mayoría de razón.

Asimismo, los Sujetos Obligados no pueden emitir acuerdos de carácter general que clasifiquen documentos o información como reservada, ya que dicha clasificación, debe estar acorde con la actualización de los supuestos definidos; resaltándose además que, la clasificación de la información se debe realizar conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la enunciada prueba de daño.

De este modo, es necesario que el **Sujeto Obligado** al aplicar la prueba de daño, distinga entre los supuestos por los cuales puede invocar la reserva de la información y cuáles de manera clara y específica son los que le atañen a la información que se solicite; situación que le hará permisible distinguir diferencias y formular una idónea y adecuada clasificación de la información, generando así, una regla individualizada y pertinente para el caso, a través de la aplicación de dicha prueba, con el propósito de obtener, una versión pública o acuerdo conforme a lo solicitado.

Siendo así que, en el caso específico de la **RESERVA**, la motivación de la clasificación también deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva; en otras palabras, para clasificar la información como reservada, se debe contar con el acuerdo respectivo el cual debe estar debidamente fundado y motivado.

Por tanto, la fundamentación y motivación consiste en la obligación que tiene todo ente público de expresar los preceptos jurídicos aplicables al asunto motivo del acto y las razones o argumentos de su actuar.

En ese contexto, esta Ponencia considera conveniente entrar al estudio de la reserva realizada por el **Sujeto Obligado** a través de la prueba de daño**,** por lo que, resulta necesario analizar el Acuerdo por medio del cual se determinó la reserva, a fin de establecer si el Comité de Transparencia cumplió cabalmente con las formalidades exigidas por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; así como, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios:

|  | **Cumplió:** | **Contenido** |
| --- | --- | --- |
| **Número de folio de la solicitud** | **No** |  |
| **Referencia de la información solicitada** | **Parcialmente** |
| **Causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada** | **No** | **No se encuentra fundado en el Acta remitida.** |
| **Fundamento y Motivación Legal** | **No** |  |
| **Conexión entre los fundamentos y motivos que dieron origen a la Reserva parcial de la información** | **No** | **No se encuentra fundado en el Acta remitida.** |
| **PRUEBA DE DAÑO** | | |
| **Riesgo Real, Demostrable e Identificable**  **(Modo, Tiempo y Lugar)** | **No** | **No se encuentra establecido en el Acta remitida.** |
| **Temporalidad de la Reserva de la información** | **No** | **No se encuentra establecida la temporalidad de la RESERVA de la información.** |
| **Autoridades competentes.** | **Sí** |  |

De lo anterior, podemos advertir que el **Sujeto Obligado** no realizó lo siguiente:

* No hizo referencia al número de folio de la solicitud de información.
* Se realizó referencia parcial de la información solicitada.
* No se indicó la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada.
* No hay conexión entre los fundamentos y motivos que dieron origen a la Reserva parcial de la información.
* No se estableció el Riesgo Real, Demostrable e Identificable (Modo, Tiempo y Lugar).
* No se indicó la temporalidad de la Reserva de la información.

Visto lo anterior, se establece que el **Sujeto Obligado** no realizó prueba de daño de manera adecuada, pues no refirió que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable, así como tampoco se estableció que el perjuicio supera de momento el interés público general que pudiera existir sobre la información requerida, aunado a lo anterior debe mencionarse que dicho acuerdo no está debidamente fundado y motivado; esto es, no encuadró correctamente la fracción de los artículos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia Local, ya que como se puede apreciar el **Sujeto Obligado** pretende clasificar con la información únicamente en con el artículo 92, fracción XIX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, al Décimo Tercero y Décimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información se presenta el índice de los expedientes clasificados como reservados, sin realizar la correcta concatenación con el artículo 113, de la Ley General de Transparencia.

De este modo, en armonía entre los principios constitucionales de máxima publicidad y de protección de datos personales, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios permite la restricción de la información en las que se clasifique la información como **RESERVADA** mediante el debido Acuerdo fundado y motivado en el que el **Sujeto Obligado** precise las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, asimismo, es claro que el mismo debe aplicar de manera restrictiva y limitada las hipótesis de clasificación y **no hacerlas valer de manera general y** **en ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información**, de conformidad con lo estipulado enel artículo 134 de la Ley de Transparencia t Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, como se advierte enseguida:

***Artículo 134.*** *Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada.*

*En ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información.*

*La clasificación de información se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.*

Por lo anterior, **El Sujeto Obligado** deberá remitir el Acuerdo de Clasificación con el que se sustente la versión pública de los documentos entregados, mismo que deberá cumplir con lo dispuesto en los numerales 49, fracción VIII, y 132, fracciones II y III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como de los Lineamientos Segundo, fracción XVIII, y del Cuarto al Décimo Primero de los *“Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas”*, que literalmente expresan:

*“****Artículo 49.*** *Los Comités de Transparencia tendrán las siguientes atribuciones:*

***(…)***

***VIII.*** *Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información;*

***(…)***

***Artículo 132.*** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

***I.*** *Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

***II.*** *Se determine mediante resolución de autoridad competente; o*

*III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.****”***

*“****Segundo. -*** *Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entenderá por:*

***XVIII.******Versión pública:*** *El documento a partir del que se otorga acceso a la información, en el que se testan partes o secciones clasificadas, indicando el contenido de éstas de manera genérica,* ***fundando y motivando la******reserva o confidencialidad****, a través de la resolución que para tal efecto emita el Comité de Transparencia.*

***...***

***Cuarto.******Para clasificar la información como******reservada o******confidencial, de manera total o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General****, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General.*

*Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.*

***Quinto.*** *La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley General, la Ley Federal y leyes estatales, corresponderá a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación de la información ante una solicitud de acceso o al momento en que generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás disposiciones aplicables en la materia.*

***Sexto.*** *Se deroga.*

***Séptimo.*** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

***I.*** *Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

***II.*** *Se determine mediante resolución del Comité de Transparencia, el órgano garante competente, o en cumplimiento a una sentencia del Poder Judicial; o*

***III.*** *Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y las correspondientes de las entidades federativas.*

*Los titulares de las áreas deberán revisar la clasificación al momento de la recepción de una solicitud de acceso, para verificar*, *conforme a su naturaleza, si encuadra en una causal de reserva o de confidencialidad.*

***Octavo.*** *Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.*

*Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.*

*En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación deberá comprender el análisis de la prueba de daño a que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, en relación con el artículo trigésimo tercero de los presentes lineamientos, así como las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva.*

***Noveno.*** *En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o secciones clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública fundando y motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen, siguiendo los procedimientos establecidos en el Capítulo IX de los presentes lineamientos.*

***Décimo.*** *Los titulares de las áreas, deberán tener conocimiento y llevar un registro del personal que, por la naturaleza de sus atribuciones, tenga acceso a los documentos clasificados. Asimismo, deberán asegurarse de que dicho personal cuente con los conocimientos técnicos y legales que le permitan manejar adecuadamente la información clasificada, en los términos de la Ley General de Archivos, Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos y demás normatividad aplicable.*

*En ausencia de los titulares de las áreas, la información será clasificada o desclasificada por la persona que lo supla, en términos de la normativa que rija la actuación del sujeto obligado.*

***Décimo primero.*** *En el intercambio de información entre sujetos obligados para el ejercicio de sus atribuciones, los documentos que se encuentren clasificados deberán llevar la leyenda correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VIII de los presentes lineamientos.”*

En función de lo planteado, resulta responsabilidad del **Sujeto Obligado** valorar el contenido de la información y en su caso advertir la posible actualización de causales de **CONFIDENCIALIDAD** y/o **RESERVA**.

En conclusión, para clasificar la información como **RESERVADA**, los acuerdos deben estar debidamente fundados y motivados, situación que no aconteció en el presente asunto, ya que, no es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa; así como, para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento realizado. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis jurisprudencial número I.4º.A. J/43, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el número de registro 175,082; que a la letra dice:

*“****FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN.****El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable****conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa****. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues****es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento****del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción.”*

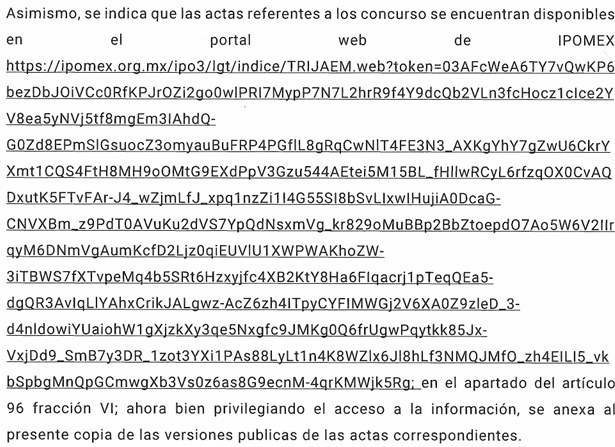
*(Énfasis añadido)*

Por lo expuesto, este Instituto considera dable ordenar al **Sujeto Obligado**, la presentación del Acuerdo de Clasificación correspondiente, con el cual se deberá fundamentar y motivar la clasificación de la información solicitada por **el Recurrente**, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de certeza jurídica, máxima publicidad y pro persona que establecen los artículos 4 y 9 fracciones I, VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En ese tenor y de acuerdo a la interpretación en el orden administrativo que le da la Ley de la materia a este Instituto específicamente, en términos de su artículo 36, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a efecto de salvaguardar el derecho de acceso a la información pública consignado a favor del **Recurrente**.

Continuando con los puntos requeridos por parte de la solicitante, abordaremos el punto relativo a las **Actas en que consten los exámenes orales relacionados con el Concurso de Oposición para ocupar las plazas de Secretario de Acuerdos.**

El **Sujeto Obligado** a través de su respuesta, remitió una liga electrónica en la que indicó que, la información solicitada se encontraba publicada en el portal del IPOMEX, de conformidad con lo siguiente:



Visto lo anterior, es necesario precisar que, para tener acceso a la liga proporcionada por parte del **Sujeto Obligado**, es necesario capturar la dirección electrónica carácter por carácter, ya que el documento digitalizado a través del cual se proporcionó el link no permite editar, modificar o procesar su contenido, asimismo, es imprescindible mencionar que dicha liga electrónica está compuesta por diversos caracteres, así como por mayúsculas y minúsculas, por lo que no es posible distinguir dichos caracteres.

Asimismo, se debe establecer que al proporcionar información pública es necesario que sea en un formato que no tenga ninguna restricción en el acceso o reutilización, por lo que, es necesario que los datos digitales (como ligas electrónicas), se proporcionen en un formato abierto.

Derivado de lo anterior, se considera necesario precisar que datos abiertos, conforme a la Carta Internacional de Datos Abiertos[[3]](#footnote-3) *son datos digitales que son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que* ***puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar.***

En ese contexto, el artículo 3°, fracción VI y X, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación, al diverso 3°, fracciones VIII y XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, precisan lo siguiente:

* ***Dato abierto:*** *Datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier persona, mismos que se conforman de diversas características, entre las cuales se encuentra que se encuentren en formatos abiertos.*
* ***Formato accesible:*** *Conjunto de características técnicas y de presentación de la información que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones estás disponibles públicamente y que permite el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios.*

En este sentido, los datos abiertos cumplen con la finalidad de poder ser utilizados, **reutilizados** y redistribuidos; y que el formato de datos abiertos, **debe permitir la aplicación y reproducción** de la información sin estar condicionados a contraprestaciones; lo anterior no debe traducirse en la posibilidad de alteración, edición o modificación del original; entonces, podemos advertir que el documento entregado en formato pdf, no permite seleccionar texto, copiarlo y pegarlo; por tanto, tampoco permite que la información pueda ser utilizada, reutilizada o redistribuida.

Por lo que, dicha orientación al particular resulta insuficiente, al no cumplir con los lineamientos que exige el numeral 161, de la ley de la materia, lo anterior en razón de que al ingresar al link remitido por **El Sujeto Obligado**, se requiere hacer una búsqueda en toda la información ahí publicada, lo que demuestra que la fuente no es precisa y concreta, ya que finalmente al lograr ingresar al portal de transparencia, se encuentra un gran cúmulo de información, que hace imposible identificar la referencia correcta en la cual **El Recurrente** obtendrá la información; para efecto de fundar y motivar la precedente aseveración, se parte de la premisa normativa siguiente:

Los artículos 11 y 161, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios señalan diversas características que debe tener la información desde el momento de su generación, publicación y entrega, así como la forma en que se deberá consultar la información, señalando una fuente precisa y concreta, a saber:

***Artículo 11.*** *En la generación, publicación y* ***entrega de información se deberá******garantizar que ésta sea accesible, actualizada, completa, congruente, confiable, verificable, veraz, integral, oportuna y expedita****, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberá estar definido y ser además legítima y estrictamente necesaria en una sociedad democrática, por lo que atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona.*

***[…]***

***Artículo 161.*** *Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante* ***la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días hábiles. La fuente deberá ser precisa y concreta y no debe implicar que el solicitante realice una búsqueda en toda la información que se encuentre disponible.***

De los artículos transcritos se establecen las características que debe tener la información desde el momento de su generación, publicación y entrega; de igual manera se contempla el procedimiento a seguir por el sujeto obligado para informar a los solicitantes sobre información que se encuentre disponible en libros, compendios, formatos electrónicos, entre otros, **haciéndole saber al solicitante como podrá consultar, reproducir o adquirir la información, en un plazo no mayor a cinco días hábiles**, comprendiendo:

1. La fuente
2. El lugar y
3. La forma

Asimismo, se establece que la fuente de la información **deberá ser**:

1. Precisa
2. Concreta
3. Y NO debe implicar que el solicitante realice una búsqueda en toda la información que se encuentre disponible.

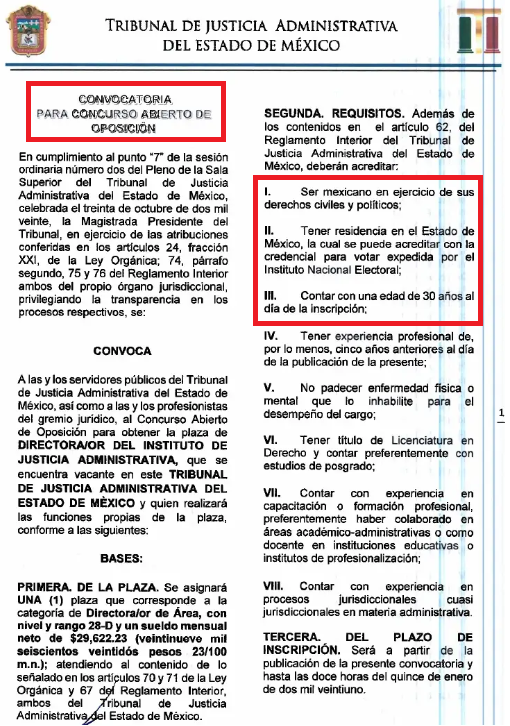
Imperativos legales que establecen el procedimiento que debe seguir **El Sujeto Obligado** para que pueda tomarse como válida su orientación sobre la forma en que puede consultar la información requerida, y que en la especie no acontece, ello porque contrario a lo que establece **El Sujeto Obligado**, la fuente donde a su decir se encuentra la información, **no es precisa** por no señalarse el lugar específico donde se encuentra la información solicitada; **no es concreta** porque su fuente no es sólida, sino por el contrario ésta resulta abstracta y desinforma al crear incertidumbre con el cúmulo de información ahí establecida; y por último, su fuente **SÍ implica que el solicitante realice una búsqueda en toda la información que se encuentra disponible**, lo que a todas luces transgrede el numeral citado.

No obstante, también remitió la versión pública del **Acta del Jurado Calificador para las evaluaciones de 13 aspirantes a ocupar 9 plazas vacantes** de fecha 23 de septiembre de 2020 y; **Acta del Procesos de Evaluación para ocupar 28 plazas vacantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México** de fecha 09 de julio de 2021; no obstante, en informe justificado, adjuntó el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México de fecha doce de abril de dos mil veinticuatro, en la que, fue aprobado por unanimidad de votos el Acuerdo número **TJAEM/CTN/VII/ORD-06/2024**, la clasificación de la información como **CONFIDENCIAL** relativo a los datos concernientes al:

* CURP;
* domicilio particular;
* credencial para votar; fecha de nacimiento;
* nacionalidad,
* nombre de particulares;
* parentesco;
* firmas,
* huella dactilar y
* sexo.

Para la elaboración de la versión pública relativa a la solicitud de acceso a la información número **00052/TRIJAEM/IP/2024** para dar atención al recurso de revisión número **01285/1NFOEM/IP/RR/2024**, correspondiente al **Acta del Jurado Calificador para las evaluaciones de 13 aspirantes a ocupar 9 plazas vacantes** de fecha 23 de septiembre de 2020 y el **Acta del Procesos de Evaluación para ocupar 28 plazas vacantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México** de fecha 09 de julio de 2021.

Ahora bien, de lo antes referido se aprecia que dichos datos se consideran como **CONFIDENCIALES**, no obstante, al ser un concurso que se publica a través de medios para poder acceder a ocupar plazas vacantes dentro del ente público, se deben de cubrir ciertos requisitos, como ejemplo, se inserta la siguiente captura de pantalla:



Visto lo anterior, se aprecia que, tanto la nacionalidad, residencia y la edad, son requisitos indispensables para acceder a los concursos que convoca el Sujeto Obligado, por tal razón, dichos datos se deben mantener públicos de los documentos remitidos en respuesta como en informe justificado de los servidores públicos referidos en la solicitud de información.

Adicionalmente, se observa que, en la etapa de manifestaciones, se adjuntaron testados (fotografía) de los documentos correspondientes al título y cédula profesional, po lo que, es importante mencionar que el **Título Profesional** es el documento expedido por instituciones del Estado o descentralizadas, y por instituciones particulares que tenga reconocimiento de validez oficial de estudios, a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad con la legislación aplicable y el acceder a la copia del mismo, o cualquier otro documento que, acredite experiencia académica, de quien ocupe cargos en la administración permitirá al particular conocer con toda certeza y de manera indudable si las personas que se desempeñan en los cargos cuenta con la idoneidad de desempeñarlos y así como la capacidad de desarrollar las actividades y atribuciones que se deriven de este. Elementos indispensables y necesarios para que se encuentre en condiciones plenas de ejercer, de manera informada, su derecho a la libertad de expresión y, en su caso, el control constitucional popular de los actos de gobierno.

Del mismo modo, la Secretaria de Educación Pública (SEP) refiere que la cédula profesional es una credencial plástica, expedida por la misma secretaria cuya finalidad es comprobar que una persona terminó por completo sus estudios y que tiene los conocimientos para ejercer su profesión.

Ahora bien, es de precisar que para obtener la **Cédula Profesional**, se requiere que;

1. El particular haya concluido sus estudios y;
2. Realizar el trámite correspondiente para su obtención, por lo que dentro de este trámite se llevan a cabo una serie de pasos de carácter personal como lo es; llenar la solicitud correspondiente, asistir a una cita, proceder al pago de derechos, entre otros.

De lo cual se puede advertir que, en razón a que **es un trámite personal y es generado de manera voluntaria y a solicitud del particular**, ésta pudo haber sido o no entregada por el particular ahora servidor público al **Sujeto Obligado**, por lo que existe la posibilidad de que este documento se encuentre o no, dentro de sus archivos.

Por otro lado, atendiendo a que la normatividad especifica de manera precisa cuáles son los requisitos que se requieren para:

1. Ingresar al servicio público y;
2. Para ocupar un determinado cargo público; que para el segundo caso, se señala que es indispensable contar con determinados documentos, en el caso concreto, ya sea con el título profesional o, (incluso) con la cédula profesional y por ende debió haber sido entregada al organismo, institución y/o administración pública a la cual se ingresó, toda vez que para ostentar ciertos cargos dentro de la administración pública, es obligación de los Sujetos Obligados poseer los documentos necesarios que den cumplimiento a los requisitos previstos por las normatividades.

Por lo anterior, esta ponencia procede a determinar que en alusión a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México, que tiene por objeto regular las relaciones de trabajo comprendidas entre los poderes públicos del Estado y los Municipios, y sus respectivos servidores públicos[[4]](#footnote-4), que se entienden establecidas mediante nombramiento, formato único de movimiento de personal, contrato o por cualquier otro acto que tenga como consecuencia la prestación personal subordinada del servicio y la percepción de un sueldo, de conformidad con el artículo 5, de la Ley en análisis, que reza de la siguiente manera:

“***Artículo 5.-*** *La relación de trabajo entre las instituciones públicas y sus servidores públicos se entiende establecida mediante nombramiento, formato único de movimiento de personal, contrato o por cualquier otro acto que tenga como consecuencia la prestación personal subordinada del servicio y la percepción de un sueldo.*

*Para los efectos de esta ley, las instituciones públicas estarán representadas por sus titulares.”*

Ahora bien, es importante señalar de manera enunciativa más no limitada que otros documentos del señalado en el párrafo anterior, lograrán probar el grado de estudios pudiendo ser el certificado de estudios, cédulas de pasantes, cedula profesional, constancias, diplomas o grados académicos, los cuales deben ser expedidos por instituciones del Estado o descentralizadas, y por instituciones particulares que tengan reconocimiento de validez oficial, a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes y que haya demostrado tener los conocimientos necesarios, lo anterior de conformidad con lo señalado por el artículo 171 y 174, de la Ley de Educación del Estado de México, que señala al respecto de manera exacta lo siguiente:

*“****Artículo 171****. Las instituciones del Sistema Educativo expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios, de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados deberán registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa y tendrán validez en toda la República, en términos de lo dispuesto en la Ley General.*

***DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA***

***Artículo 174.-*** *La Autoridad Educativa Estatal deberá implantar y mantener actualizado un Sistema Estatal de Información y Gestión Educativa, mismo que deberá proporcionar información para satisfacer las necesidades de operación del Sistema Educativo Estatal.*

***Asimismo participará en la actualización e integración permanente del Sistema de Información y Gestión Educativa, que contendrá:***

***…***

***IV.*** *El Registro Estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos;*

*…*

***VI.******Certificados, diplomas de especialidad, títulos y cédulas profesionales*** *de educación básica, media superior y superior;*

***VII.******Cédulas de pasante y autorizaciones temporales para el ejercicio de una actividad profesional;***

*…*

***IX.******Certificaciones Profesionales****, expedidas por los colegios o asociaciones de profesionistas.” (Sic)*

Asimismo, es necesario resaltar que **es viable mantener visible la fotografía en los documentos que comprueben el último grado de estudios de los servidores públicos** en atención a lo dispuesto por el Criterio 15/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el que se establece lo siguiente:

***FOTOGRAFÍA EN TÍTULO O CÉDULA PROFESIONAL ES DE ACCESO PÚBLICO.*** *Si bien la fotografía de una persona física es un dato personal, cuando se encuentra en un título o cédula profesional no es susceptible de clasificarse como confidencial, en virtud del interés público que existe de conocer que la persona que se ostenta con una calidad profesional determinada es la misma que aparece en dichos documentos oficiales.* ***De esta manera, la fotografía contenida en el título o cédula profesional es pública y susceptible de divulgación****.*

***Resoluciones:***

*•* ***RRA 3777/16.*** *Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 07 de diciembre de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos.*

*•* ***RRA 0047/17 y acumulado.*** *Instituto Federal de Telecomunicaciones. 01 de marzo del 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.*

*•* ***RRA 1189/17.*** *Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 03 de mayo de 2017. Por mayoría, con voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora.*

Por lo que, es dable la entrega en una correcta versión pública de los documentos referidos anteriormente.

Ahora bien, con relación a los documentos descritos con anterioridad, es menester señalar que pudieran ser susceptibles de reflejar la siguiente información:

* **Calificaciones:** En atención con lo anterior, se considera que las calificaciones obtenidas, **es información íntima de los aspirantes aceptados o no, pues corresponde a su desempeño dentro de un proceso de admisión, lo cual únicamente atañe a estos, por lo que se considera que es un dato confidencial**, pues inclusive revela le voluntad de participar en un proceso para estudiar una especialización que implica un costo para el particular.

De tales circunstancias, se considera que las calificaciones y el promedio, es información confidencial lo cual atañe únicamente a los aspirantes, por lo que, son clasificados en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de la materia.

Para motivar la confirmación de la clasificación de la información, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, lo que en el presente caso sucedió.

* **Firma:** Tratándose de personas físicas en el rol de ciudadanos, es considerada como un atributo de la personalidad, en virtud de que a través de esta se puede identificar a una persona, por lo que se considera un dato personal y, dado que para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de su titular, es información clasificada como confidencial.

En contraste, tratándose de servidores públicos cuando se emite un acto de autoridad en ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas, la firma mediante la cual valida dicho acto jurídico es pública. Lo anterior, en virtud de que la firma se plasmó en cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, estribando entonces en un requisito de validez.

Por tanto, la firma de los servidores públicos vinculada al ejercicio de la función pública es información pública, dado que documenta y rinde cuentas sobre el debido ejercicio de sus atribuciones con motivo del empleo, cargo o comisión que le han sido encomendados.

**Cabe precisar que, en el presente caso, se trata de los servidores públicos en su calidad de particular, por lo que, es de señalar que la firma es un dato personal confidencial y únicamente será público dicho dato cuando sirva para la emisión de un acto de autoridad, en ejercicio de sus funciones.**

Lo anterior, es así, toda vez que la firma de servidores públicos, vinculada al ejercicio de la función pública es información de naturaleza pública, pues documenta y rinde cuentas sobre el debido ejercicio de sus atribuciones, lo cual acontece en el presente caso, pues garantiza que los trabajadores recibieron sus remuneraciones quincenales.

La publicidad de dichos datos, se robustece, con el Criterio de Interpretación, de la Segunda Época, con clave de control SO/002/2019, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que establece lo siguiente:

*“****Firma y rúbrica de servidores públicos.*** *Si bien la firma y la rúbrica son datos personales confidenciales, cuando un servidor público emite un acto como autoridad, en ejercicio de las funciones que tiene conferidas, la firma o rúbrica mediante la cual se valida dicho acto es pública.”*

Conforme a lo expuesto, en el presente caso, procede la clasificación, en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de la firma localizada en el documento comprobatoria de nivel de estudios, pues da cuenta de un grado o nivel académico, documento que no fue firmado por el titular del dato en calidad de servidor público.

* **Nombre:** Es un atributo de la personalidad, esto es la manifestación del derecho a la identidad y razón que de por sí misma permite identificar a una persona física. Debe evitarse su revelación tratándose de particulares, en sentido contrario, tratándose de servidores públicos, el nombre no goza de protección, al ser un dato público.
* **Fotografía:** Por lo que hace a las fotografías, es preciso señalar que estas dan cuenta de las características físicas de los servidores públicos; por lo que, no debe perderse de vista que la imagen personal es la apariencia física, la cual puede ser captada en dibujo, pintura, escultura, fotografía, y video; la imagen así captada puede ser reproducida, publicada y divulgada por diversos medios, desde volantes impresos de la forma más rudimentaria, hasta filmaciones y fotografías transmitidas por televisión cine, video, correo electrónico o Internet.

Así, dichos datos constituyen la reproducción fiel de las características físicas de una persona en un momento determinado, por lo que representan un instrumento de identificación, proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual; lo que en el presente caso, acreditaría e identificaría a una persona como servidor público, por lo que es posible advertir que existe cierto interés público, cuando la fotografía obra en documentos de servidores públicos vinculados con el cumplimiento de disposiciones legales.

Además, existen documentos que contienen la fotografía con los cuales se permite identificar que una persona que se acredita como trabajador gubernamental, realmente tiene el cargo con el que se ostenta, otros documentos con los cuales se rinde cuentas a la ciudadanía, por ejemplo cuando se cubre el perfil de puesto; además cuando se brinda servicios a la ciudadanía, es de relevancia conocer e identificar a todos sus trabajadores, no importa el nivel o rango (**con excepción del personal operativo en materia de seguridad**, respecto del cual el Pleno de este Instituto ya se ha pronunciado en el sentido de que la información que los haga identificados o identificables debe clasificarse como **RESERVADA**).

En este sentido, resultan aplicables por analogía, los Criterios 15/17 y 1/13 del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en los cuales se esgrimen argumentos, que, si bien no refieren de manera específica a fotografías de servidores públicos, sí establecen un criterio para que este dato personal pueda ser considerado como público, cuando se pretende acreditar que una persona es servidor público.

Debe tenerse presente que el actuar de los servidores públicos incide de manera específica en los derechos de los particulares, pues el acto de un servidor público en ejercicio de sus funciones, de manera directa genera derechos y obligaciones pues se considera un acto administrativo o acto de autoridad, por lo que es primordial, que estos trabajadores se identifiquen ante la ciudadanía, por lo que otorgar acceso a los documentos que obran en los archivos de los sujetos obligados y que además están directamente relacionados con el cumplimiento de disposiciones normativas o el ejercicio de funciones revisten un interés público.

Por lo anterior, cuando las fotografías de los servidores públicos obran en documentos que dan cuenta del cumplimiento de funciones, requisitos legales o los acredita como servidores públicos, deben ser consideradas un dato personal, **que no puede ser clasificado como confidencial**, pues en este caso, es superado por el interés público de conocer si en realidad, la persona que se ostenta en carácter de servidor público, se encuentra en ese encargo, si realiza las funciones o si cumple con los requisitos legales; sin que se considere como factor diferenciador para determinar la publicidad o clasificación el cargo o nivel jerárquico en el que se desempeñe el servidor público.

Conforme a lo anterior, las fotografías de servidores públicos sin importar el nivel o rango guardan la naturaleza de públicas (con excepción del personal operativo en materia de seguridad) y no procede su clasificación, en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que en las versiones públicas que se ordenen, no podrá clasificarse esa información.

Cabe hacer la aclaración que aquellos documentos que sean clasificados en su totalidad por no revestir de interés público, como lo es la credencial de elector, la fotografía correrá la misma suerte que el documento en cuestión, únicamente para dicha expresión documental.

* **Clave Única de Registro de Población.** Es un dato personal confidencial, ya que por sí sola brinda información personal de su titular y lo hace identificado e identificable, motivo por el cual se aprueba su eliminación de las versiones públicas, ya que además no guarda relación con el desempeño laboral de un individuo, simplemente se trata de un trámite administrativo requerido por la autoridad federal para hacer identificables a las personas.

Situación que se robustece, con el Criterio 18/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que establece lo siguiente:

***“Clave Única de Registro de Población (CURP).*** *La Clave Única de Registro de Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como información confidencial.”*

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación de la Clave Única de Registro de Población; por lo que, la constancia de dicho dato corre al misma suerte, pues únicamente contiene datos que hacen identificables de los servidores públicos, que en nada abonan a la transparencia y no rinden cuantas de la forma de actuar, por lo que, es un documento privado, en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Código de barras de cédula profesional.** Acorde a información de la Secretaría de Educación Pública; con la finalidad de fortalecer las acciones en materia de registro, control y vigilancia del ejercicio profesional, se establece que el código de barras y bidimensional QR, constituyen elementos de seguridad, dado que con su lectura se puede acceder al contenido del documento (Cédula Profesional). Además, que, con dichos datos, únicamente se localiza, el número de cédula, el nombre completo del servidor público, profesión, año de expedición e institución, al dirigirte únicamente a la página <https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action>.

Por tales circunstancias, al no revelar datos personales confidenciales del servidor público, se considera que el código de barras **no actualiza la causal de clasificación prevista en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.**

En ese orden de ideas, resulta preciso mencionar que de conformidad con la página oficial de Gobierno de México (consultada en https://www.gob.mx/cedulaprofesional), el formato de la nueva cédula profesional electrónica, contiene diversos datos susceptibles de ser clasificados, tales como cadenas y sellos digitales en los que se puede obtener la clave CURP, la cual actualiza el supuesto de clasificación previsto en la fracción I del artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, tal como se puede apreciar a continuación:

Imagen que contiene Tabla

Descripción generada automáticamente

De lo anterior, debido a que, el **Sujeto Obligado** clasificó información de naturaleza pública como lo es el código de barras de la cédula profesional y fotografía, **se determina procedente ordenar la entrega de las cédulas profesionales enviadas en respuesta en versión pública correcta.**

Con base en lo anteriormente expuesto, la respuesta rendida por el **Sujeto Obligado,** no es susceptible de colmar totalmente el derecho de acceso a la información pública, resultando procedente ordenar la entrega de la información solicitada, en una correcta versión pública.

Finalmente, respecto los **documentos relacionados con el Concurso de Oposición para ocupar las plazas de Secretario de Acuerdos**; cabe destacar que tanto en respuesta como en informe justificado, el Sujeto Obligado remitió diversa documentación en donde consta lo siguiente:

* Notificación al **C. TOMAS GABRIEL ESQUIVEL GIL**, que el Jurado Calificador, determinó declararlo ganador.
* Solicitud para realizar las gestiones correspondientes para la aplicación de exámenes de aptitudes a los candidatos propuestos por los titulares de las diversas Salas Regionales y Secciones de la Sala Superior.
* Solicitud para programar y aplicar el examen de conocimientos respectivo, a los candidatos propuestos por los titulares de las unidades administrativas, que aspiran a obtener las plazas vacantes que se encuentran disponibles para ocupación.
* Solicitud para realizar las gestiones correspondientes para la aplicación de exámenes de conocimientos a dos candidatos **(Joaquín García Domínguez)**.
* Sometimiento a consideración las propuestas para ocupar la plaza de “Secretario Proyectista” que se encuentra vacante, citando como candidato al profesionista **Joaquín García Domínguez**.
* *Curriculum Vitae* de los servidores públicos referidos en la solicitud de información.

De conformidad con lo anterior, se concluye que, queda colmado dicho punto, ya que, el derecho de acceso a la información pública, consiste en que la información solicitada conste en un documento en cualquiera de sus formas, a saber: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados; los que, podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico de conformidad con el artículo 3, fracción XI, de la Ley de la materia, el cual señala lo siguiente:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas****,*** *resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico…” (Sic)*

Siendo aplicable, el Criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente:

**“*CRITERIO 0002-11***

***INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3°, 4°, 11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

1. *Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*
2. ***Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y***
3. ***Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”***
4. ***De la Versión Pública.***

Toda vez que los documentos referidos anteriormente y atendiendo al requerimiento del ciudadano, este Órgano Garante determina ordenar que la entrega de la información al **Recurrente** se haga en ***versión pública***, esto es, omitiendo, eliminando o suprimiendo la información personal de cada funcionario público, susceptibles de ser clasificadas como confidencial o cualquier otro dato que ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de dicha persona.

A este respecto, los artículos 3, fracciones IX, XX, XXI y XLV; 51 y 52, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios establecen:

***“Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

***IX.******Datos personales:*** *La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;*

***XX.******Información clasificada:*** *Aquella considerada por la presente Ley como reservada o confidencial;*

***XXI.******Información confidencial****: Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;*

***XLV. Versión pública:*** *Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.*

***Artículo 51.*** *Los sujetos obligados designaran a un responsable para atender la Unidad de Transparencia, quien fungirá como enlace entre éstos y los solicitantes. Dicha Unidad será la encargada de tramitar internamente la solicitud de información* ***y tendrá la responsabilidad de verificar en cada caso que la misma no sea confidencial o reservada.*** *Dicha Unidad contará con las facultades internas necesarias para gestionar la atención a las solicitudes de información en los términos de la Ley General y la presente Ley.*

***Artículo 52.*** *Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, así como las resoluciones a los recursos que en su caso se promuevan serán públicas, y de ser el caso que contenga datos personales que deban ser protegidos se podrá dar su acceso en su versión pública, siempre y cuando la resolución de referencia se someta a un proceso de disociación, es decir, no haga identificable al titular de tales datos personales.”*

Así, los datos personales que obren en poder de los Sujetos Obligados deben estar protegidos, adoptando las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas necesarias para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, considerando además, que conforme al principio de finalidad, todo tratamiento de datos personales que efectúen deberá estar justificado en la Ley, lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, con relación con el 38, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, los cuales se transcriben para mayor referencia:

*“****Artículo******22****. Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera.*

*El responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas establecidas en el aviso de privacidad, en los casos siguientes:*

*I. Cuente con atribuciones conferidas en ley y medie el consentimiento del titular.*

*II. Se trate de una persona reportada como desaparecida, en los términos previstos en la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables...*

***Artículo******38****. Con independencia del tipo de sistema y base de datos en el que se encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable adoptará, establecerá, mantendrá y documentará las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, a través de controles y acciones que eviten su daño, alteración, pérdida, destrucción, o el uso, transferencia, acceso o cualquier tratamiento no autorizado o ilícito, de conformidad con lo dispuesto en los lineamientos que al efecto se expidan.”*

De este modo, en armonía entre los principios constitucionales de máxima publicidad y de protección de datos personales, la Ley permite la elaboración de versiones públicas en las que se suprima aquella información relacionada con la vida privada de los particulares y de los servidores públicos toda vez que ésta tiene por objeto proteger datos personales, entendiéndose por tales, aquéllos que hacen identificable a una persona.

En efecto, toda la información relativa a una persona física que le pueda hacer identificada o identificable constituye un dato personal en términos del artículo 4 fracción XI, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; por consiguiente, se trata de información confidencial, que debe ser protegida por el Sujeto Obligado, en ese contexto, todo dato personal susceptible de clasificación debe ser protegido.

Asimismo, de la versión pública deberá dejarse a la vista de la **Recurrente** la firma de los servidores públicos.

Robustece lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2518 del Tomo XXII, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2008, de rubro y texto siguientes:

*"****TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ARTÍCULOS 3o., FRACCIÓN II, Y 18, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IGUALDAD, AL TUTELAR EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES SÓLO DE LAS PERSONAS FÍSICAS.*** *Si se toma en cuenta que la garantía constitucional indicada no implica que todos los sujetos de la norma siempre se encuentren en condiciones de absoluta igualdad, sino que gocen de una igualdad jurídica traducida en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado, se concluye que los artículos 3o., fracción II, y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al tutelar sólo el derecho a la protección de datos personales de las personas físicas y no de las morales, colectivas o jurídicas privadas, no violan la indicada garantía contenida en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tal distinción se justifica porque el derecho a la protección de los datos personales se refiere únicamente a las personas físicas por estar encausado al respeto de un derecho personalísimo, como es el de la intimidad, del cual derivó aquél. Esto es, en el apuntado supuesto no se actualiza una igualdad jurídica entre las personas físicas y las morales porque ambas están en situaciones de derecho dispares, ya que la protección de datos personales, entre ellos el del patrimonio y su confidencialidad, es una derivación del derecho a la intimidad, del cual únicamente goza el individuo, entendido como la persona humana."*

Por ende, en el presente caso el **Sujeto Obligado** debe atender las disposiciones en materia de protección de datos, a fin de salvaguardar los datos de particulares testando estos y emitir el debido Acuerdo que sustente la versión pública que se genere, ya que la clasificación de la información no se da por el simple mandato de la Ley, sino que es necesario que el Sujeto Obligado cuando clasifique un documento, ya sea en todo o en parte, debe atender lo dispuesto por la Ley de la materia, siendo que dicha clasificación es un trabajo en conjunto tanto de los Servidores Públicos Habilitados, de las Unidades de Transparencia y del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, teniendo el deber los primeros, de presentar ante la Unidad de Transparencia la propuesta de clasificación de la información, para que luego ésta se presente ante el Comité de Transparencia de así resultar procedente el proyecto de clasificación de la información y finalmente sea éste último quien apruebe, modifique o revoque la clasificación de la información solicitada.

Así, es que el Sujeto Obligado deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos señalados en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y con los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; máxime que de conformidad con lo establecido en las Leyes y Lineamientos citados, para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la Ley que expresamente le otorga el carácter de confidencial.

Ello, sin pasar por alto que la clasificación respectiva tiene que cumplirse mediante las formalidades impuestas por la ley; es decir, mediante Acuerdo debidamente fundado y motivado, en términos de los numerales 49, fracción VIII, y 132, fracciones I, II y III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios en vigor, así como los numerales Segundo, fracción XVIII, y del Cuarto al Décimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, que literalmente expresan:

***“Artículo 49.*** *Los Comités de Transparencia tendrán las siguientes atribuciones:*

***VIII.*** *Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información;*

***Artículo 132.*** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

***I.*** *Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

***II.*** *Se determine mediante resolución de autoridad competente; o*

*III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.****”***

De este modo, como ha sido señalado en la presente resolución, en armonía entre los principios constitucionales de máxima publicidad y de protección de datos personales, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios permite la elaboración de versiones públicas en las que se suprima aquella información relacionada con la vida privada de particulares mediante el debido Acuerdo fundado y motivado en el que el Sujeto Obligado precise las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, asimismo, es claro que el mismo debe aplicar de manera restrictiva y limitada las hipótesis de clasificación y no hacerlas valer de manera general. Es importante señalar que, para acreditar dichos supuestos jurídicos se debe fundar y motivar correctamente la categorización de la información.

Por tanto, la fundamentación y motivación consiste en la obligación que tiene todo ente público de expresar los preceptos jurídicos aplicables al asunto motivo del acto y las razones o argumentos de su actuar.

Al respecto, el máximo tribunal del país ha establecido jurisprudencia respecto a qué debe entenderse por fundamentación y motivación, en los siguientes términos:

***FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.*** *La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.*

Así, en un acto de autoridad se surte la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho.

Más aún, a través de diversa jurisprudencia dictada por el Poder Judicial de la Federación se sostiene que la finalidad de la fundamentación o motivación es la de explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión de la autoridad:

***FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN****. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción.*

En consecuencia, la fundamentación y motivación implica que en el acto de autoridad, además de contenerse los supuestos jurídicos aplicables se expliquen claramente, por qué, a través de la utilización de la norma se emitió el acto. De este modo, la persona que se siente afectada pueda impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.

Por lo tanto, la entrega de documentos en su versión pública debe acompañarse necesariamente del Acuerdo del Comité de Transparencia del Sujeto Obligadoque la sustente, en el que se expongan los fundamentos y razones que llevaron a la autoridad a testar, suprimir o eliminar datos de dicho soporte documental, ya que el no hacerlo implica que lo entregado no es legal ni formalmente una versión pública, sino más bien una documentación ilegible, incompleta o tachada; pues no señalar las razones por las que no se aprecian determinados datos, ya sea porque se testan o suprimen, deja al solicitante en estado de incertidumbre, al no conocer o comprender porque no aparecen en la documentación respectiva, es decir, si no se exponen de manera puntual las razones de ello se estaría violentando desde un inicio el derecho de acceso a la información del solicitante.

Finalmente, y en mérito de lo expuesto en líneas anteriores, resultan parcialmente fundados los motivos de inconformidad vertidos por la parte **Recurrente**, por ello con fundamento en la *segunda hipótesis* del artículo 186, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **MODIFICA** la respuesta a la solicitud de información **00052/TRIJAEM/IP/2024**, que ha sido materia del presente fallo.

Por lo antes expuesto y fundado.

**SE RESUELVE**

**PRIMERO.** Se **MODIFICA** la respuesta entregada por el **Sujeto Obligado** a la solicitud de información número **00052/TRIJAEM/IP/2024**, por resultar parcialmente fundados los motivos de inconformidad vertidos por la parte **Recurrente**, en términos del Considerando **CUARTO** de esta resolución.

**SEGUNDO.** Se **ORDENA** al **Sujeto Obligado** haga entrega a la parte **Recurrente** en términos del Considerando **CUARTO** de esta resolución, a través delSistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)**, lo siguiente:

1. El Acuerdo del Comité de Transparencia en el que se clasificó como información **RESERVADA**, los exámenes teórico y práctico, relacionados con el Concurso de Oposición para ocupar las plazas de Secretario de Acuerdos, debidamente fundado y motivado.
2. La convocatoria del Concurso de Oposición para ocupar las plazas de Secretario de Acuerdos, en la que resultaron seleccionados los Servidores Públicos referidos en la solicitud de información.
3. La correcta versión pública de los documentos remitidos en informe justificado, en donde se aprecie la nacionalidad, la residencia y la edad; así como el Título y Cédula Profesional de los servidores públicos referidos en la solicitud de información.

*De la información que se ordena su entrega en* ***numeral 3)****, del* ***Resolutivo Segundo****, se deberá entregar el Acuerdo del Comité de Transparencia correspondiente, en términos del artículo 49, fracción VIII y 132 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen dentro del soporte documental respectivo y se ponga a disposición de la parte Recurrente.*

*Para el caso de que, después de la búsqueda exhaustiva y razonable de la información ordenada en el* ***numeral 2)****, del* ***Resolutivo Segundo****, no obre en los archivos del* ***Sujeto Obligado****, por no haberse generado o administrado por dichos conceptos, bastará con que lo haga del conocimiento del Particular de manera precisa y clara.*

**TERCERO. NOTIFÍQUESE** la presente resolución a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)** al Titular de la Unidad de Transparencia del **Sujeto Obligado**, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 198, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **Sujeto Obligado** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**QUINTO. NOTIFÍQUESE** a la parte **Recurrente** la presente resolución a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)**, y hágase de su conocimiento que en caso de considerar que le causa algún perjuicio, podrá promover el Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 196, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y con lo establecido en los artículos 159 y 160, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública podrá impugnarla vía recurso de inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA (EMITIENDO VOTO PARTICULAR) Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA (EMITIENDO VOTO PARTICULAR); EN LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISÉIS DE OCTUBRE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JMV/CCR/jasm

1. ***IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.***

   *Del examen de compatibilidad de los artículos*[*73 y 74 de la Ley de Amparo*](javascript:AbrirModal(1))*con el artículo*[*25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*](javascript:AbrirModal(2))***no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo,*** *en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Registro, 2, 002,944. I.4o.A.40 A (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Pág. 1899 [↑](#footnote-ref-2)
3. [*https://opendatacharter.net/principles-es/*](https://opendatacharter.net/principles-es/) [↑](#footnote-ref-3)
4. ***Artículo 1****, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México*. [↑](#footnote-ref-4)